

RECURSO DE REVISIÓN
3/2023

QUEJOSOS Y RECURRENTES:

***** Y

PONENTE:
GABRIELA ELEONORA CORTÉS ARAUJO

SECRETARIA:
ÉDGAR ESCOBAR RÍOS

Ciudad de México. Acuerdo del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, correspondiente al trece de octubre de dos mil veintitrés.

VISTOS, para resolver, los autos del toca R.C. 3/2023, relativo al recurso de revisión interpuesto por *****
***** (en adelante “los padres intencionales”) y ***** (en adelante “persona gestante sustituta”), contra la sentencia dictada en la audiencia constitucional celebrada el veinte de julio de dos mil veintidós, firmada el catorce de octubre siguiente por la Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en los autos del juicio de amparo indirecto ***/2022-VI; y,

RESULTANDO:

A. Hechos y antecedentes procesales.

1. PRIMERO. Jurisdicción voluntaria. Por escrito presentado el 23 de noviembre de 2021, ante la Oficialía de Partes Común para Juzgados y Salas Número 35, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, una pareja integrada por dos hombres, ambos de nacionalidad española¹, y una mujer, de nacionalidad

¹ Demanda de amparo indirecto ***/2022-VI, anexos 1 y 2.

mexicana², todos por su propio derecho, promovieron diligencias de jurisdicción voluntaria con el objeto de que el juzgador tuviera conocimiento, paso a paso, del estado que guardaría la gestación sustituta de un embrión implantado, producto de una fertilización in vitro, en la que los dos hombres serían quienes se convertirían en padres y la mujer sería quien, voluntariamente, llevaría a cabo el proceso de gestación.

2. Igualmente, solicitaron que, de verificarse el alumbramiento y la sobrevivencia de la persona recién nacida, se ordenara al Registro Civil en la Ciudad de México levantar el acta de nacimiento correspondiente con los nombres de sus padres, en virtud de que estaba manifiesta su voluntad procreacional, de buena fe, sin ánimo de lucro y sin controversia alguna entre los que suscribieron el denominado "*CONTRATO DE MATERNIDAD SUSTITUTA*" (el "Contrato"), celebrado el 23 de marzo de 2021, ante el Notario Público 188 de la Ciudad de México, de acuerdo al acta 39,974, de la propia fecha.
3. Todo lo anterior, lo pretendieron justificar mediante la exhibición del contrato y de todos los documentos que acreditaran el éxito de la transferencia e implantación embrionaria, el estatus del embarazo con exámenes médicos, de los pagos para cubrir los gastos de análisis clínicos, atención médica, medicamentos y gastos hospitalarios.
4. Del asunto tocó conocer al Juez Quinto de Proceso Oral Familiar de la Ciudad de México, quien por auto de 1º de diciembre de 2021, lo registró bajo el expediente ****/2021 y determinó declararse incompetente para conocer del asunto y no admitir a trámite las diligencias de jurisdicción voluntaria, por las razones y fundamentos que estimó conducentes.

² *Ibidem*, anexo 3.

5. **SEGUNDO. Recurso de apelación.** No conformes con la anterior determinación, los dos hombres y la persona gestante sustituta interpusieron recurso de apelación, del que tocó conocer a la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, bajo el toca *******/2022, que dictó la sentencia de 28 de abril de 2022, en donde confirmó la resolución recurrida.

B. Juicio constitucional.

6. **TERCERO. Presentación de la demanda de amparo.** Mediante escrito presentado el 23 de mayo de 2022, los padres intencionales y la persona gestante sustituta, todas por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridades siguientes:

Autoridades responsables:

Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Juez Quinto de lo Familiar de Proceso Oral de la Ciudad de México.

Actos reclamados:

La sentencia dictada el veintiocho de abril de dos mil veintidós y su ejecución.

7. **CUARTO. Admisión y trámite del juicio de amparo indirecto.** Correspondió conocer del asunto a la Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, quien, por auto de 25 de octubre de 2022, registró la demanda bajo el expediente 495/2022-VI y la admitió a trámite.
8. **QUINTO. Audiencia constitucional y sentencia.** El 20 de julio de 2023 se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia, firmada el 14 de octubre siguiente, cuyo punto resolutivo es el siguiente:

*“Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *****
***** , ***** y *****
***** , por su propio derecho, contra actos que reclaman
de la Cuarta Sala Familiar y Juez Quinto de Proceso Oral en
Materia Familiar, ambas autoridades del Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México, los cuales quedaron
precisados en el resultando primero de esta resolución”.*

9. **SEXTO. Recurso de revisión.** Inconformes con esa determinación, la parte quejosa interpuso el presente recurso de revisión, el cual fue registrado y admitido a trámite mediante auto de 18 de enero de 2023 emitido por el presidente de este tribunal colegiado bajo el expediente **R.C. 3/2023**. Finalmente, se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento.
10. **SÉPTIMO. Turno.** Por acuerdo de 30 de enero de 2023 se ordenó turnar el asunto al magistrado Carlos Arellano Hobelsberger, para que formulara el proyecto de resolución correspondiente.
11. **OCTAVO. Nueva integración.** En proveído de 1º de junio de 2023 se ordenó hacer del conocimiento de las partes que, a partir de esa fecha, este tribunal se integraría por la magistrada Gabriela Eleonora Cortés Araujo y los magistrados Alejandro Sánchez López y Carlos Arellano Hobelsberger.
12. **NOVENO. Sesión y retorno.** El 10 de julio del año en curso se listó el presente asunto para ser visto en sesión de 14 siguiente, en la cual el asunto quedó en lista para ser discutido en sesión de 11 de agosto (todas las datas de 2023). En esta última fecha, se determinó desechar el proyecto propuesto y ordenar el retorno del expediente.
13. Mediante proveído de 15 de agosto de 2023 se retornó el presente asunto a la magistrada Gabriela Eleonora Cortés Araujo, para que formulara el proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

14. **PRIMERO. Competencia.** Este tribunal es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con los artículos 107, fracción VIII, último párrafo, de la Constitución General de la República; 81, fracción I, inciso e, y 84 de la Ley de Amparo; 38, fracción V, 39, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que se interpuso contra una sentencia pronunciada en audiencia constitucional por una juez de distrito en materia civil con residencia en esta ciudad.
15. **SEGUNDO. Oportunidad.** El recurso de revisión fue interpuesto dentro del plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, dado que la resolución recurrida fue notificada personalmente a quienes recurren el 14 de noviembre de 2022 y surtió sus efectos el día siguiente, por lo que dicho término transcurrió del 16 al 30 de noviembre del citado año, sin contar los días 19, 20, 21, 26 y 27 del mismo mes y año, por haber sido inhábiles y el escrito respectivo se presentó el 22 de noviembre de la referida anualidad. De ahí su oportunidad.
16. **TERCERO. Síntesis de los conceptos de violación, de la resolución impugnada y de los agravios.** Resulta innecesaria la transcripción de los documentos que aquí se señalan, con fundamento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 “**CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN³**”, también aplicable a las resoluciones

³ Texto: “De los preceptos integrantes del capítulo X “De las sentencias”, del título primero “Reglas generales”, del libro primero “Del amparo en general”, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y

impugnadas o recurridas mediante el juicio de amparo, al constituir hechos notorios⁴ que, además, constan en los autos del juicio de amparo indirecto ***/2022 y cuyas copias fueron circuladas, con la debida oportunidad, a los magistrados integrantes de este tribunal colegiado, para el estudio correspondiente.

A. Conceptos de violación. La parte quejosa expuso, a través de cuatro motivos de disenso, lo siguiente:

a) Resulta incongruente el argumento de la sala de apelación en el sentido de que las pretensiones de los apelantes exceden la razón de ser en el procedimiento de jurisdicción voluntaria que tiene por objeto constatar hechos descritos por quienes la promueven, pero no para hacerlo respecto de la maternidad subrogada (sic), porque los padres intencionales solicitaron las diligencias de jurisdicción voluntaria para exhibir constancias para acreditar el estado de la gestación y, una vez verificado el alumbramiento, ordenar al Registro Civil la expedición del acta de nacimiento de la persona recién nacida como hija o hijo de los dos padres y, por tanto, establecer una filiación.

Sostienen que la jurisdicción voluntaria es la única vía para lograr dicho objetivo, toda vez que los menores concebidos de manera “tradicional” en el caso de parejas heterosexuales no requieren una orden judicial para que el Registro Civil lleve a cabo el registro de una persona recién nacida.

Máxime que, al no existir conflicto, no es necesario resolver

corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer”, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXXI; mayo de 2010, p. 830 (registro digital 164618).

⁴ En los términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a los juicios constitucionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley de Amparo.

esta situación mediante controversia del orden familiar ni se puede acudir de manera directa ante la autoridad administrativa del registro civil sin orden judicial que le indique expedir el acta de nacimiento relativa; tampoco es posible realizar un proceso de adopción, porque el material genético corresponde a alguno de los dos padres.

Igualmente, la autoridad añade a la litis cuestiones que nunca fueron solicitadas por las personas promoventes, toda vez que desechó la petición, porque no se exhibieron las formas migratorias de los padres, las cuales nunca fueron solicitadas por el juez de origen; aunado a que determinó que la maternidad subrogada (sic), al ser un acto que se va a dar de manera sucesiva en el tiempo que implica que los solicitantes deban estar presentes durante la gestación, impide al juzgador obligarles a permanecer en territorio nacional por tiempo ininterrumpido mayor a 180 días, en tanto que la parte apelante siempre manifestó su voluntad, libre e informada, de permanecer en el país durante la gestación.

b) La sala de apelación desatendió el objeto de la jurisdicción voluntaria; es decir, que ante la única autoridad judicial en materia familiar que existe cuando no hay controversia, se llevaran a cabo y acreditaran todos los actos que, en cumplimiento del contrato de maternidad sustituta, realizaran las partes, de manera que se reconociera el derecho de afiliación que guardan los padres intencionales con el producto de la gestación, el cual, ni la gestante, cuestiona. De ahí que para el reconocimiento de filiación, el juez de lo familiar cuenta con facultades para hacerlo y emitir una resolución que pueda tener el efecto de que el Registro Civil expida un acta de nacimiento en favor de una persona menor de edad con la filiación que se le haya tenido reconocida, en términos de los artículos 24 y 159 del Código

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a. LXXXVIII/2019 **“FILIACIÓN DE UN MENOR DE EDAD NACIDO BAJO LA TÉCNICA DE MATERNIDAD SUBROGADA. ES DEBER DEL JUEZ ESTABLECERLA, AUN ANTE LA AUSENCIA DE REGULACIÓN ESPECÍFICA”**.

c) La sala de apelación violenta el derecho humano a la identidad de la persona ya concebida, reconocido en el artículo 4º constitucional, 3.1. de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la misma manera en que contraviene lo dispuesto en los artículos 22 del Código Civil y 83 y 940 del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el entonces Distrito Federal, en el sentido de que todas las personas deben contar con un nombre, un registro de nacimiento; conocer su historia biológica y filial, tener una familia que le procure cuidados; tener reconocida su personalidad jurídica y nacionalidad; así como todos los demás derechos que subyacen a estos, como son los alimentarios y sucesorios.

Todas estas prerrogativas no fueron observadas por la sala de alzada para el producto de la concepción en términos del artículo 22 del Código Civil para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y en total contravención a la jurisprudencia 1a./J. 18/2014 **“INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL”**.

d) El acto impugnado también violenta lo previsto en los artículos 1º, 4º, 6º, 17 y 133 constitucionales; 16.1 y 16.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 23.1. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 10.1. del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, sociales y culturales; 1.1., 15.1., 15.2., 17.1. y 17.2. de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos, entre otros instrumentos internacionales, en torno al derecho a fundar una familia. Esto es así, porque se niega a los padres y al producto de la concepción a contar con una familia; además que con ello se violenta el libre desarrollo de la personalidad para que dos hombres puedan tener hijos, como manifestación de su autonomía y respeto a su identidad familiar, como esfera más íntima de la vida privada individual y de pareja.

B. Sentencia de amparo. Las consideraciones y fundamentos en que se sustentó la sentencia recurrida para negar la protección constitucional son, en síntesis, las siguientes:

a) En primer lugar, declaró fundado, pero inoperante, lo aducido en el sentido de que existió violación al principio de congruencia, dado que en el acto reclamado no se discutía sobre la calidad migratoria de los quejosos; empero, a pesar de tener razón en ese punto específico, se precisó que a nada práctico conduciría conceder la protección constitucional, porque no se superaría la decisión final.

b) En segundo lugar, desestimó los argumentos encaminados a sostener la violación al principio de congruencia y exhaustividad con relación al derecho de identidad de las personas menores de edad, toda vez que desde el momento de su nacimiento no cuenta con acta respectiva, ya que la juez federal consideró que las diligencias de jurisdicción voluntaria, se solicitan por interés exclusivo del promovente y, por ende, no vinculan ni generan perjuicio o beneficio a nadie más en su acervo jurídico, por lo cual no eran aptas para establecer lo pretendido por los quejosos.

c) Que conforme a la naturaleza de la jurisdicción voluntaria, no era posible considerar, como lo pretende la parte quejosa, que la sala deba modificar su resolución para que estime procedente la intervención del juez para los efectos que indicaron; en virtud de que, si bien es cierto, manifestaron haber celebrado un contrato de maternidad sustituta, el cual fue ratificado ante notario público, en donde los padres contratantes, y la persona gestante sustituta, se obligaron a llevar a cabo la implantación de un embrión obtenido mediante fertilización in vitro con células de los padres contratantes, en el útero de la persona con capacidad de gestar, a fin de que esta llevara el embarazo a término y, una vez llegado el momento del parto, esta última les entregara a los padres contratantes al recién nacido junto con el certificado de nacimiento, para la expedición de la respectiva acta de nacimiento por el oficial del registro civil, en la que constara la filiación a favor de los padres contratantes, también lo es que de ninguna manera es la vía con la que la parte quejosa pueda documentar el contenido del contrato de maternidad sustituta, allegando constancias que justifiquen la transferencia e implantación embrionaria, el estado del embarazo, los exámenes médicos, los pagos cubiertos por gastos de análisis, atención médica, medicamentos y gastos hospitalarios, para que, ante el nacimiento, se ordene al titular del Registro Civil de esta ciudad levantar el acta de nacimiento a nombre de los padres contratantes.

d) Que el objetivo de quienes solicitan el amparo no podía prosperar mediante las diligencias de jurisdicción voluntaria, porque pretendían que la sala responsable modificara la resolución del juez de lo familiar, para que este diera seguimiento al cumplimiento de las cláusulas del contrato de maternidad que celebraron y reconociera un derecho de filiación a favor de los padres contratantes, para

lo cual se girara oficio al Registro Civil para que expidiera el acta de nacimiento del recién nacido en el momento correspondiente. Empero, aun y cuando en las diligencias de jurisdicción voluntaria se prevea que en caso de que alguna de las partes formule oposición se deberán dejar a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que corresponda, a través de dicho procedimiento no es posible acordar lo planteado, porque el juzgador no puede verificar el cumplimiento del contrato de maternidad sustituta, en tanto que dichas diligencias solo tienen como finalidad patentizar actos y hechos ya realizados o por realizarse, pero no tienen el alcance de solo dar fe de las cuestiones ante él planteadas, ni tampoco verificar o constatar el cumplimiento de un contrato celebrado entre particulares, ya que el incumplimiento o la diferencia presentada en su interpretación requiere de la función jurisdiccional, conforme a la tesis: **“JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. NO ES UN MEDIO EFICAZ PARA MODIFICAR LOS CONTRATOS”**.

e) Que al no ser las diligencias el medio idóneo para que se dé fe o se verifique el cumplimiento de un contrato, no presupone intervención judicial alguna; porque, con ello, la labor del juez se reduciría a la de un mero fedatario, con detrimento de su función jurisdiccional, ya que la legislación no prevé, dentro de las atribuciones que confiere a los juzgadores, que sean estos quienes verifiquen o constaten el cumplimiento de un contrato celebrado entre particulares, porque la lógica de los contratos es que solo ante su incumplimiento o alguna diferencia relacionada con ellos, se pueda acudir a los tribunales para resolver las diferencias que surjan entre las partes, de ahí que la jurisdicción voluntaria no sea el procedimiento eficaz para verificar el cumplimiento de los contratos.

f) Además, para constatar el cumplimiento del contrato, los recurrentes pueden acudir ante un notario público para que dé fe de esos hechos, pues dicho funcionario cuenta con facultades que la propia ley le confiere para legitimar, legalizar y autenticar los actos y contratos donde intervenga, para dotarlos de la forma legal necesaria a fin de que tengan eficacia plena en el mundo del derecho.

g) En otro aspecto, se dejó establecido que las diligencias de jurisdicción voluntaria no son la vía adecuada para que en su momento se ordene inscribir el nacimiento del infante en el registro civil, porque las diligencias promovidas no pueden surtir efectos contra terceros, ni tampoco reconocer derechos o imponer prestaciones a los contratantes, por lo que el juez primigenio no está facultado para ordenar la expedición del acta de nacimiento petitionada y, además, implicaría imponer una obligación al encargado del registro civil, sin que hubiera sido llamado a una contienda judicial, rompiendo con ello la naturaleza jurídica de las diligencias de jurisdicción voluntaria en la que no existe controversia.

h) Se precisó que los quejosos tienen expedito su derecho para acudir ante el Registro Civil a solicitar la expedición del acta de nacimiento y, en caso de que se niegue la misma, tienen la facultad de hacer valer los medios de defensa que estimen pertinentes para impugnarlo. De igual forma, respecto al ámbito familiar, los quejosos destacan aspectos del derecho de familia, tales como la filiación, su atribución a determinado tipo de progenitores, voluntad para concebir y maternidad subrogada, respecto de lo cual, deben ser motivo de verificación tres aspectos esenciales: i) que la persona que como madre gestante participa en el contrato debe ser mayor de edad y con plena capacidad de ejercicio; ii) la voluntad libre de vicios de la

gestante, y; iii) en ciertos casos, la existencia de la voluntad procreacional o voluntad de concebir un hijo. Temas todos estos que son propios del derecho familiar, que, si bien pueden dar lugar o no a un conflicto de partes en el que, incluso, deban analizarse los requisitos pertenecientes a la intervención de la gestante subrogada en el contrato relativo en el ámbito familiar y bajo las reglas del derecho procesal familiar, debe considerarse que tales aspectos deben ser dilucidados ante un juez familiar de primera instancia, pero no en la vía ni por los motivos que propusieron los quejosos.

i) Estableció que la resolución que confirma el proveído que desecha la jurisdicción voluntaria no le impide a la persona menor de edad, cuando nazca, gozar de su derecho a la identidad, pues la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la ausencia de regulación expresa o específica sobre cómo establecer la filiación de los hijos nacidos mediante maternidad subrogada, no debe tenerse como un impedimento para que el Registro Civil se pronuncie al respecto, pues todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, entre los cuales se encuentra el derecho a la identidad de los menores de edad y la necesidad de atender a su interés superior, conforme a la tesis 1ª LXXXVIII/2019 **“FILIACIÓN DE UN MENOR DE EDAD NACIDO BAJO LA TÉCNICA DE MATERNIDAD SUBROGADA. ES DEBER DEL JUEZ ESTABLECERLA, AÚN ANTE LA AUSENCIA DE REGULACIÓN ESPECÍFICA”**.

j) Por tanto, ante la realidad fáctica de un infante nacido bajo esta técnica, su derecho a la identidad y la protección a su interés superior exigen que determine la filiación que le corresponde, ya que tienen derecho a contar con todos los

derechos derivados de la filiación, alimentarios y sucesorios, así como a recibir cuidados, educación, afecto y todo lo necesario para su adecuado desarrollo. Por lo que, si entre las reglas aplicables en materia de filiación y registro de nacimiento, hay algunas que permitan atribuir la filiación, como lo serían la presunción de paternidad o el reconocimiento de hijas e hijos, debe tenerse presente que la demostración de un vínculo biológico no es un requisito indispensable para establecer la filiación sobre un hijo, como sucede en la aplicación de las técnicas de reproducción asistida, en las que opera la voluntad para concebirlo o voluntad procreacional y, en el caso de la maternidad subrogada, es necesaria también la concurrencia de la voluntad libre de vicios de la madre gestante y sobre la base de que dicha mujer debe ser mayor de edad y con plena capacidad de ejercicio. De esta forma, llegado el momento del nacimiento del menor, no sería necesaria la exhibición de una sentencia ejecutoria que le autorice al Registro Civil de esta ciudad a realizar el registro del menor con la filiación de los padres contratantes, pues este tiene la obligación de establecerla, siempre y cuando se exhiban las constancias pertinentes que permitan demostrar que fue engendrado por medio de la técnica de reproducción asistida, denominada maternidad subrogada.

k) Por otra parte, puntualizó que no se advierte una afectación al libre desarrollo de la personalidad de los quejosos, pues en ningún momento la sala responsable se pronunció respecto a la manera en la que quieren conformar una familia o algún impedimento legal, social o moral, sino que solamente se ocupó de analizar que no era posible que se tuviera conocimiento, paso por paso, del estado que guarda la gestación, para poder realizar lo referente a la expedición del acta de nacimiento.

l) Finalmente, concluyó que la resolución reclamada dictada por la sala responsable se encuentra debidamente fundada y motivada, al argumentar que la solicitud consistente en documentar y acreditar el contenido del contrato de maternidad sustituta no encuadra en la naturaleza jurídica de la jurisdicción voluntaria, sin que lo anterior implique una restricción a la tutela judicial efectiva, prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no se obstaculiza a las personas el acceso a la justicia, sino que, únicamente, se ha constatado que la vía planteada por los quejosos no es la idónea para los fines que persiguen, de forma que a nada práctico conduciría dar trámite a la solicitud, si tales medios no pueden surtir efectos contra terceros, ni con ello podría girarse oficio al Registro Civil para que expida acta de nacimiento con el nombre de los padres contratantes, máxime cuando no ha nacido la criatura, por ende, es un acto futuro de realización incierta.

17. **CUARTO. Agravios.** Los recurrentes formularon los agravios siguientes:

a) Que la juez de distrito no valoró las pruebas ofrecidas en el juicio de amparo, específicamente, las documentales consistentes en los informes rendidos por el Registro Civil de la Ciudad de México, de donde se advierte la documentación indispensable para levantar un acta de nacimiento para menores nacidos a través de la maternidad sustituta. Tampoco consideró que dicha autoridad administrativa exige la existencia de *"una sentencia ejecutoriada en la que se ordene el registro del nacimiento"*, por lo que, simplemente, dejó expedito su derecho para acudir ante el Registro Civil a solicitar el acta de nacimiento correspondiente.

b) Que la juez federal no tomó en cuenta el interés superior del menor, quien nació el pasado veintiuno de junio de dos mil veintidós, pues de haberlo hecho así, hubiese ordenado la revocación del auto dictado por la autoridad responsable a efecto de seguir el procedimiento necesario para obtener la sentencia que el propio registro civil necesita para otorgar el acta de nacimiento del menor.

c) Que la juez federal hace una interpretación errónea del objeto y finalidad de las diligencias de jurisdicción voluntaria, bajo la premisa de que mediante estas no podrían producirse los efectos jurídicos pretendidos, al no ser las diligencias el medio idóneo para que se verificara el cumplimiento del contrato y que bastaba con que acudieran ante el Registro Civil para obtener el acta de nacimiento, lo que consideran ilegal.

d) Que el contrato de maternidad sustituta exhibido en las diligencias de jurisdicción voluntaria solo produce efectos entre las partes, de manera que solo el destinatario (Registro Civil) es quien debe actuar para que levante el acta de nacimiento con los datos de los padres del menor. De ahí que, si no hay otro destinatario interesado que deba cumplir la orden judicial, no existe un efecto general contra terceros.

e) Que el acta de nacimiento es un documento que tiene efectos *erga omnes* y no porque así lo pueda indicar la autoridad responsable, sino porque así lo señala el artículo 122 constitucional.

f) Que es incorrecta la consideración de la juez federal al dejar expedito su derecho para acudir ante el Registro Civil a solicitar la expedición del acta de nacimiento, pues ello solo confirma la omisión de valorar las pruebas aportadas al juicio de amparo, pues el propio Registro Civil ha sostenido que es

necesario exhibir una sentencia ejecutoriada que ordene el registro de nacimiento correspondiente. Al respecto los recurrentes citan la tesis aislada III.4o.(III Región) 11 C **“JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. CONFORME A LOS NUMERALES 94 Y 878 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA PREPARAR UN JUICIO EJECUTIVO CIVIL, EN ATENCIÓN A SU NATURALEZA JURÍDICA, AL NO EXISTIR CONTROVERSIA ENTRE PARTES”**.

g) Que el argumento relativo a que "[a] través del procedimiento instado el juzgado no puede verificar el cumplimiento del contrato de maternidad sustituta, ya que dicha vía no es la adecuada...", les deja en estado de indefensión, ya que va en contra del criterio que estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. LXXXVIII/2019 **"FILIACIÓN DE UN MENOR DE EDAD BAJO LA TÉCNICA DE MATERNIDAD SUBROGADA. ES DEBER DEL JUEZ ESTABLECERLA, AÚN ANTE LA AUSENCIA DE REGULACIÓN ESPECÍFICA"**.

h) Que la juez federal omitió considerar que la finalidad de las diligencias de jurisdicción voluntaria es solicitar la intervención de un juez familiar para lograr el registro del nacimiento del menor, en donde pasó por alto que los promoventes: cuentan con las técnicas médicas para la gestación sustituta; pactaron las condiciones con la gestante; contaron con una clínica especializada en la reproducción asistida; firmaron un contrato entre las partes ratificado, incluso, ante notario público; y se llevó a término la gestación y el producto sea un niño vivo, viable y sano, todo ello resulta insuficiente para obtener la filiación jurídica, ya que al darse el alumbramiento en la clínica u hospital que sea, el certificado de nacimiento (formato de la Secretaría de Salud)

que firmó el médico que recibe al menor, fue y siempre será expedido a nombre de quien dio a luz o tuvo el alumbramiento. A pesar de lo cual, resulta jurídicamente imposible que dicho certificado se expida a nombre de los padres, a menos de que haya un acto de corrupción y so pena de las sanciones aplicables; de ahí que, en ningún caso se expedirá a nombre de ninguna otra persona un acta de nacimiento con nombres diferentes a los que constan en el referido certificado.

i) Que el Registro Civil requiere, indispensablemente, una resolución de autoridad judicial que ordene el registro del menor nacido bajo la técnica de reproducción asistida, a fin de adecuar la realidad fáctica a la realidad jurídica, tal y como se advierte de los oficios del Registro Civil de la Ciudad de México, que fueron obtenidos en diverso procedimiento de la misma naturaleza en el cual se advierte que es requisito para la expedición del acta de nacimiento lo siguiente: certificado de nacimiento, constancia de inexistencia de registro de nacimiento, copia certificada del acta de matrimonio, identificación original vigente, comprobante de domicilio no mayor de tres meses y sentencia ejecutoriada que ordene el registro de nacimiento correspondiente.

j) Que, en consecuencia, es necesaria la intervención del juez familiar, en la vía de jurisdicción voluntaria, ya que aun cuando es obligación del Registro Civil expedir las actas de nacimiento, debe existir una sentencia dictada por un juez familiar que ordene el registro del menor hijo de los promoventes.

k) Que conforme a lo anterior, también resulta imposible jurídicamente que, junto con el certificado y el contrato de maternidad sustituta, el Registro Civil de cualquier Estado de la República expida el acta de nacimiento con el nombre de

los promoventes; por ende, la intervención judicial en la vía de jurisdicción voluntaria se hace necesaria y forzosa, pues sin mediar conflicto o controversia y al requerirse la intervención judicial, debe obtenerse el reconocimiento por medio de la jurisdicción voluntaria para que el juez de origen constatará el procedimiento de sustitución materna y se sirviera ordenar al Registro Civil la expedición del acta de nacimiento correspondiente.

l) Que la afirmación de la juez de distrito, en el sentido de que a través de las diligencias de jurisdicción voluntaria no se puede verificar el cumplimiento del contrato de "*maternidad sustituta*" es incorrecta, ya que lo que pretenden es que ante la autoridad responsable se documente y acredite en actuaciones judiciales el contenido del contrato de maternidad sustituta, a pesar de que ello no es, en sí, el objeto o pretensión de la jurisdicción voluntaria, sino que es el sustrato fáctico y la base probatoria para que dicha autoridad responsable, justamente, tenga los elementos suficientes para que le conste el vínculo filiatorio y reconozca y declare que existe la filiación entre el menor y los promoventes, y no de la persona gestante sustituta, para que gire el oficio al Registro Civil indicando que el acta de nacimiento sea expedida con los nombres de los padres.

m) Que de esa manera, el objeto de haber instado la jurisdicción voluntaria atiende a la naturaleza intrínseca de esta, la cual está consensuada en la ley, en la jurisprudencia y en la doctrina, en un elemento relativo a la inexistencia de controversia con alguna parte, por lo que dichas diligencias cumplieron con ello, ya que los interesados/demandantes del amparo comparecieron conjuntamente y sin controversia alguna y, dado que necesitan de la intervención de la autoridad jurisdiccional y la resolución judicial, por los motivos expuestos.

18. **QUINTO. Estudio.** Como cuestión previa, este tribunal colegiado estima pertinente establecer que, en el asunto, el punto a tratar consiste en verificar si, a través de la jurisdicción voluntaria, es posible obtener una resolución judicial que permita a dos hombres tener reconocida su paternidad respecto de una persona recién nacida, cuya gestación fue de manera sustituta por la implantación de un embrión fecundado bajo la técnica de reproducción in vitro; de manera que aquellos puedan obtener un acta de nacimiento en la que se reconozca esta filiación.
19. Por lo anterior, se precisa que, tanto los documentos en los que basa su acción, como en las peticiones que hizo, primero, en la jurisdicción voluntaria y, luego, en la apelación, el amparo indirecto y, ahora, en el recurso de revisión, se ha señalado que la técnica de gestación fue por sustitución y no por subrogación, como de manera indistinta, pero errónea, indica la sentencia federal que se revisa.
20. La distinción que existe entre gestación sustituta y subrogada es relevante, toda vez que provoca efectos jurídicos diversos. Se adelanta que, mientras en la sustitución la persona gestante no tiene un vínculo biológico con la persona gestada y, por tanto, se trata de la implantación de un embrión que contiene una información genética diferente, en la subrogación, la persona gestante sí comparte relación biológica con el producto de la concepción, el cual puede ser, por ejemplo, implantado o surgir de una inseminación artificial.
21. En este sentido, debe señalarse que, como se demostrará, asiste razón a los recurrentes en torno a que la decisión de la juzgadora federal que convalida la resolución de la sala de apelación responsable es contraria a los derechos humanos de las personas quejasas para fundar una familia, como efecto transversal de la igualdad y no discriminación y el libre desarrollo de la personalidad. Igualmente, de manera refleja, la resolución trastoca

los derechos fundamentales del (ya nacido) menor de edad, quien no cuenta con documento alguno que garantice sus derechos a la identidad y la filiación, como punto de partida para proteger otros valores también vinculados al interés superior de niñas, niños y adolescentes.

22. Más aún, la intención de la parte quejosa no se dirige a constatar el cumplimiento de un contrato, sino a la valoración de distintos medios de prueba para acreditar una filiación con el recién nacido; situación que, desde luego, tiene como efecto la obtención de un acta de nacimiento que no es posible adquirir con el Registro Civil de manera directa, debido a que la normatividad vigente aplicable no lo faculta para ello.
23. Así, conforme a lo expuesto por los recurrentes, se estima que los agravios resultan, en lo medular, fundados, lo que provoca que este órgano colegiado deba revocar la sentencia recurrida, como lo ordena el artículo 93, fracción V, de la Ley de Amparo; toda vez que, contrario a lo que determinó la juez federal, es posible lograr el reconocimiento de paternidad y la filiación de una persona menor de edad a través de las diligencias de jurisdicción voluntaria, puesto que la fe de hechos que otorgue la titular de una notaría pública o la petición directa al Registro Civil no satisface la pretensión de la parte quejosa ni es acorde con los derechos fundamentales que deben ser tutelados.
24. Luego, de los conceptos de violación se aprecia que, en lo medular, se dirigen a cuestionar ¿es posible establecer la filiación y reconocimiento de una persona nacida bajo la técnica de gestación sustituta a través de la jurisdicción voluntaria y ordenar al Registro Civil la expedición del acta relativa?
25. La respuesta, a juicio de este tribunal federal debe responderse en sentido afirmativo, por las razones y fundamentos que se exponen a continuación.

A. Marco constitucional, convencional, legal, jurisprudencial y doctrinal.

26. Por principio de cuentas, para detallar el núcleo de los derechos fundamentales que se concentran en este caso y, a través de esta decisión, avalar su pleno ejercicio, se debe tener presente que el derecho fundamental a la dignidad humana, aun ante su carácter abstracto, es el eje rector del resto de valores y libertades que gozan las personas que deben ser promovidos, respetados, protegidos y garantizados por quienes tengan el carácter de autoridades.
27. En este orden, debido a la interdependencia e indivisibilidad de los derechos fundamentales y sus garantías, dentro de los innumerables sistemas de correlación y transversalidad que pueden construirse, el conjunto que conforman los principios de igualdad y no discriminación y libre desarrollo de la personalidad dan lugar al ejercicio de prerrogativas más concretas.
28. Sobre el problema a estudio, la determinación de fundar una familia con la voluntad (no obligación⁵) de tener descendencia, con independencia de si es acordada entre las personas que se encuentran unidas en matrimonio o concubinato, por ejemplo, o por el deseo de un solo individuo, provoca que otros derechos y obligaciones deban ser observados respecto de esa descendencia que se integra a un núcleo familiar, ya sea por procesos naturales de fecundación, técnicas de reproducción humana o por adopción.
29. Por tanto, cuando se busca establecer un vínculo familiar en

⁵ La finalidad "perpetuar la especie" u otras análogas, como finalidad del matrimonio (que puede extenderse a otras instituciones de hecho), han sido declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo, al resolver la Primera Sala el amparo en revisión 457/2012 del que derivó el criterio aislado 1a. CCXV/2014 **"MATRIMONIO. EL ARTÍCULO 143, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE OAXACA, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE PRESCRIBE "PERPETUAR LA ESPECIE", COMO UNA DE LAS FINALIDADES DE ESA INSTITUCIÓN, ES CONTRARIO A LOS ARTÍCULOS 1o. Y 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS"**, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, libro 6, mayo de 2014, t. I, p. 548.

tratándose de personas menores de edad, se adiciona al conjunto de derechos ya mencionados, como elemento predominante, el principio de interés superior de niñas, niños y adolescentes como aquel que rodeará a un cúmulo relevante de derechos fundamentales intrínsecos al entorno familiar: el nombre, la identidad, la nacionalidad, la filiación, los alimentos, entre otros.

30. Sobre el contenido del artículo 4º, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos⁶, en torno al derecho a formar una familia y a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado, en diversos precedentes, que la “protección constitucional de la familia no obedece a un modelo o estructura específico, al tratarse de un concepto social y dinámico [en el que] la protección de los derechos de la niñez, como es crecer dentro de una familia y no ser discriminado o visto en condiciones de desventaja según el tipo de familia de que se trate⁷”, mientras que, decidido con libertad el modelo familiar que se adecue a la autonomía de las personas, quienes hayan decidido tener hijas y/o hijos, también contarán con la protección constitucional de sus derechos reproductivos para lograrlo.
31. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tampoco establece una sola forma de procreación que deba ser protegida, por lo que también ha sido la Corte quien infirió que esta no se reduce, exclusivamente, a la “reproducción tradicional”, por lo que los métodos de reproducción humana asistida buscan facilitar o sustituir los procesos naturales de fecundación, a través de la intervención de personas especialistas en esta área de las

⁶ **Art. 4o.** La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.
Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

[...]
⁷ Tesis P. XXIII/2011 “**FAMILIA. SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL COMPRENDE A LA FORMADA POR PAREJAS DEL MISMO SEXO (HOMOPARENTALES)**”, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXXIV, agosto de 2011, p. 871.

ciencias y que pueden comprender a la inseminación intrauterina o artificial y a la fecundación in vitro, la transferencia de embriones, la transferencia intra-tubárica de gametos, la transferencia intratubárica de cigotos y la transferencia intra-tubárica de embriones, la criopreservación de ovocitos y embriones, la donación de ovocitos y embriones⁸. las cuales pueden dar lugar a que la gestación sea “propia”, por sustitución o subrogada, de acuerdo a cada caso.

32. Dentro de esta categoría, la *fecundación in vitro* juega un papel relevante⁹, pues constituye el procedimiento por medio del cual los óvulos son removidos de los ovarios y son fertilizados con espermatozoides en un procedimiento de laboratorio. Una vez concluido, el óvulo fertilizado (embrión) es devuelto al útero de la persona con capacidad de gestar.
33. Las fases que se siguen durante la *fecundación in vitro* son las siguientes: a) inducción a la ovulación; b) aspiración de los óvulos contenidos en los ovarios; c) inseminación de óvulos con espermatozoides; c) observación del proceso de fecundación e incubación de los embriones, y d) transferencia embrionaria al útero materno.
34. Sobre el desarrollo embrionario en la *fecundación in vitro*, existen cinco etapas que duran en total cinco días. En primer lugar, se seleccionan los óvulos maduros, los cuales son fecundados, por lo que se da paso al desarrollo del cigoto. En las primeras veintiséis horas de desarrollo el cigoto se divide en dos células, las cuales posteriormente se dividen en cuatro células en el día dos y finalmente se vuelve a dividir para formar ocho células en el día tres. En el día cuatro, se habla de *Mórula* y del día cuatro al día cinco, el embrión llega a su estado de *Blastocisto*.

⁸ Corte IDH. Caso Artavia Murillo y Otros (“Fecundación In Vitro”) Vs Costa Rica. Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2012, párrafo 63.

⁹ Que como se verá más adelante, al igual que la inseminación asistida, también puede ser homóloga y heteróloga.

35. Los embriones pueden permanecer en cultivo hasta cinco días antes de ser transferidos al útero de la mujer. Por lo tanto, el embrión puede ser transferido desde el día dos y hasta el día cinco. Dependiendo de la caracterización morfológica y dinámica de la división celular, se toma la decisión respecto de cuándo transferir el embrión. La transferencia embrionaria puede ser directamente al útero o a las trompas de falopio. A los doce días de la transferencia embrionaria, se sabe si la mujer quedó embarazada a través de marcadores.
36. En el caso de la inseminación artificial, la fecundación ocurre de manera natural sin la existencia de coito, lo que implica que el óvulo es de la persona fecundada y, por tanto, el producto de la concepción compartirá información genética con ella. En este tipo de situaciones, la gestación es de tipo **subrogado**.
37. Cuando se lleva a cabo una inseminación in vitro, existe la extracción o donación del ovocito femenino para fecundarlo fuera del organismo de la persona con capacidad de gestar con espermatozoides obtenidos previamente. Si la fecundación es exitosa, el embrión se transfiere al útero para proseguir con su gestación.
38. Tanto la inseminación artificial como la fecundación in vitro pueden ser, a su vez, de dos tipos: homóloga (o conyugal) o heteróloga (o por donación).
39. En el primer supuesto (homóloga o conyugal), el espermatozoides y el óvulo provienen de la pareja que, generalmente, no ha podido concebir por problemas de salud reproductiva que impiden la fecundación “natural”¹⁰.

¹⁰ Aunque carece de regulación específica en México, otro tipo de reproducción asistida a través de fecundación in vitro se ha conceptualizado con información genética de tres personas, en las llamadas “técnicas de reemplazo mitocondrial”, regulada, por ejemplo, en el Reino Unido, en cuyo caso, la persona gestada tiene ADN de tres progenitores.

40. En cambio, en la segunda hipótesis (heteróloga o por donación) el espermato y/o el óvulo proviene(n) de donadores anónimos debido a que, por ejemplo, existen enfermedades genéticas o de transmisión sexual, azoospermia del hombre, personas que quieren conformar una familia homoparental o mujeres u hombres que quieren formar una familia de tipo monoparental.
41. Si la técnica corresponde a la inseminación artificial heteróloga el óvulo será de la persona gestante y el espermato de un donador; pero si se trata de fecundación in vitro heteróloga, el ADN¹¹ del embrión podrá estar vinculado con algún progenitor o con ninguno de ellos e, inclusive, gestarse en un útero de una persona diversa a quienes desean tener descendencia.
42. En este último caso, estaremos frente a una gestación **sustituta**, debido a que, como ya se había adelantado, no existe vínculo genético entre la persona gestante y el embrión.
43. Ahora, vinculado con el derecho a fundar una familia a través de las técnicas de reproducción asistida, surge la necesidad de tutela y reconocimiento del derecho a la reproducción humana, como una expresión de la dignidad humana y del libre desarrollo de la personalidad, todo esto reconocido dentro del artículo 4o. constitucional, puesto que quienes, en afán de dar continuidad a su genética, acuden a las técnicas científicas que les ofrecen la oportunidad de tener descendencia y, dentro de esta, la protección de la voluntad procreacional de quien no compartirá ADN con el embrión pero que, a pesar de ello, manifiesta el deseo de ser reconocido.
44. Así, derechos reproductivos constituyen un nuevo campo de normatividad nacional e internacional y han sido confirmados en la Conferencia Nacional de Población y Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas (El Cairo, 1994) y en la

¹¹ Ácido desoxirribonucleico.

Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer de la misma organización internacional (Pekín, 1995)¹².

45. Con relación a dichos temas, destaca como precedente relevante, la ejecutoria por la que la Primera Sala del máximo tribunal del país, resolvió el amparo directo en revisión 2766/2015, de la que derivaron, entre otras, las tesis 1a. LXXVI/2018 **“DERECHO A LA REPRODUCCIÓN ASISTIDA. FORMA PARTE DEL DERECHO A DECIDIR DE MANERA LIBRE, RESPONSABLE E INFORMADA, SOBRE EL NÚMERO Y EL ESPACIAMIENTO DE SUS HIJOS, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS¹³”**; 1a. LXXVIII/2018 **“VOLUNTAD PROCREACIONAL. CONSTITUYE UN FACTOR DETERMINANTE EN LA FILIACIÓN DE UN NIÑO O UNA NIÑA QUE NACIÓ BAJO UN PROCEDIMIENTO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL HETERÓLOGA¹⁴”** y 1a. LXXIX/2018 **“VOLUNTAD PROCREACIONAL.**

¹² RAMÍREZ BARBA, ÉCTOR JAIME Y VÁZQUEZ GUERRERO, MIGUEL ÁNGEL. Reproducción Asistida. Aspectos médicos, científicos, técnicos y bioéticos, en Normativa en Bioética, Derechos Humanos, Salud y Vida, (coord. Gabriel García Colorado), México, Trillas, 2009, pp. 73 y 81.

¹³ Texto: “Tanto hombres como mujeres tienen el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada, sobre el número y el espaciamiento de sus hijos; este derecho está protegido por el Estado Mexicano y encuentra sustento en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 16 consagra el derecho que tienen todos los hombres y mujeres de fundar una familia, señalando que ésta es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. De acuerdo con lo anterior, la decisión de tener hijos a través del empleo de las técnicas de reproducción asistida, pertenece a la esfera más íntima de la vida privada y familiar de una pareja, y la forma en cómo se construye esa decisión, es parte de la autonomía de la voluntad de una persona”, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, libro 55, junio de 2018, t. II, p. 957.

¹⁴ Texto: “La inseminación artificial heteróloga es aplicada a una mujer que es fecundada con un material genético de un donador anónimo; por lo que en un círculo familiar, el hijo producto de una inseminación de ese tipo no tendrá biológicamente un material genético compatible con el cónyuge varón; siendo éste el escenario, lo que se debe acreditar es si los cónyuges otorgaron su voluntad para que la mujer fuera inducida bajo ese tratamiento, ya que en caso afirmativo, jurídicamente se tendrá una filiación con el hijo que nazca de dicha técnica de reproducción asistida y, en consecuencia, respecto del padre, surgirá un parentesco igual a aquel que normalmente se adquiere por consanguineidad; así, cuando en el ejercicio de un derecho en su dimensión de pareja, existe consentimiento de ellos para someterse a una inseminación artificial heteróloga, lo que se está dirigiendo es la voluntad consensuada de ambos, para ejercer su derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos, ello a pesar de que entre el cónyuge varón y el menor no existan lazos genéticos; a este consentimiento del padre se le conoce como voluntad procreacional, que es el deseo de asumir a un hijo como propio aunque biológicamente no lo sea. Esta postura supera la idea de identidad como sinónimo de vínculo biológico o genético y, en cambio, inspira el contenido del derecho a la identidad en sentido amplio, inclusive de aspectos que se vinculan con la identidad en sentido dinámico. Por ello, en la inseminación artificial heteróloga, la voluntad procreacional es uno de los factores determinantes para la constitución del vínculo filial del menor nacido bajo ese

SU FUNDAMENTO DERIVA DEL RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DEL DERECHO A LA IDENTIDAD DE UN MENOR DE EDAD¹⁵.

46. Pues bien, la técnica de gestación sustituta, como técnica que representa una realidad aportada por los avances de la ciencia que repercute en la concepción tradicional que hasta ahora se ha tenido en torno a las relaciones de familia, principalmente el parentesco y la filiación con hijas e hijos y los derechos de maternidad y/o paternidad, ya que puede dar lugar a diversas situaciones y conflictos entre las partes involucradas, que hace imperativa su regulación.
47. Entre esas situaciones se encuentra la relativa a que con motivo de la aplicación de esta técnica puede haber, por ejemplo, hasta tres madres del bebé: la que desea tenerlo, la que dona el óvulo y la que lo gesta. Así como que pueden originarse conflictos derivados, por ejemplo, que, al momento del nacimiento, la madre gestante se niegue a entregar al bebé (sobre todo en la maternidad subrogada), o bien, que los padres contratantes se nieguen a recibirlo si presenta algún problema médico, entre muchas más posibilidades.

tratamiento con el cónyuge o concubino varón, y para que éste jurídicamente quede vinculado a todas las consecuencias de derecho de una auténtica relación paterno-filial. Así, en el caso del hijo nacido con el consentimiento de la pareja, mediante una inseminación artificial heteróloga, la existencia de una liga biológica es innecesaria para el reconocimiento legal de la relación paterno-filial, pues en este caso, la realidad biológica cede o se torna irrelevante para establecer la filiación”, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, libro 55, junio de 2018, t. II, p. 980.

¹⁵ Texto: “La voluntad procreacional es uno de los factores determinantes para la constitución del vínculo filial del menor nacido bajo el tratamiento de inseminación artificial heteróloga, con el cónyuge o concubino varón, y para que éste jurídicamente quede vinculado a todas las consecuencias de derecho de una auténtica relación paterno-filial. Esta voluntad se protege bajo el amparo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y constituye el fundamento de una relación de filiación entre el hijo así concebido y el esposo o concubino de quien es su madre; lo que impedirá que éste posteriormente pueda entablar acción de impugnación de la paternidad, pues se considera que quien actúa así, contradice los parámetros de la buena fe objetiva, al comportarse en forma incoherente con sus precedentes determinaciones. Por el contrario, si el marido no brindó su consentimiento al procedimiento de inseminación realizado con material genético de un tercero donante, se estima que le asiste el derecho de impugnar la paternidad del menor que nació bajo dicho procedimiento”, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, libro 55, junio de 2018, t. II, p. 981.

48. Ante esta realidad fáctica, la Corte ha determinado **cómo ha de establecerse la filiación de la persona menor de edad involucrada en el caso a la luz de su interés superior.**
49. Para tal efecto, destacó que el libre desarrollo de la personalidad es un derecho humano personalísimo, derivado de la dignidad humana, por el cual todo individuo puede elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida, sin coacción ni controles injustificados, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, de acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera¹⁶.
50. Desde el punto de vista externo, el derecho le da cobertura a una genérica libertad de acción que permite realizar cualquier actividad que el individuo considere necesaria para el desarrollo de su personalidad; y desde una perspectiva interna, protege una esfera de privacidad del individuo contra incursiones externas que permitan la capacidad para tomar ciertas decisiones a través de las cuales se ejerce la autonomía personal¹⁷, a lo que agregó que, como cualquier derecho fundamental, el libre desarrollo de la personalidad tiene su límite en los derechos de tercero y el orden público¹⁸.
51. Con base en lo anterior, consideró que la persona con capacidad de gestar que, por su libre voluntad, accede a colaborar con quienes no pueden convertirse en progenitores, lo hace en ejercicio del mencionado derecho fundamental.

¹⁶ Tesis aislada P. LXVI/2009, del Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, Diciembre de 2009, pág. 7, de rubro: **DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE.**

¹⁷ Tesis aislada 1ª. CCLXI/2016 (10ª.), de la Primera Sala, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, pág. 898, de rubro: **DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. SU DIMENSIÓN EXTERNA E INTERNA.**

¹⁸ Tesis aislada 1ª. CCLXIV/2016 (10ª.), de la Primera Sala, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, pág. 899, de rubro: **DERECHOS DE TERCERO Y ORDEN PÚBLICO. CONSTITUYEN LÍMITES EXTERNOS DEL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD.**

52. Por cuanto a si la demostración de un vínculo biológico es o no un requisito indispensable para que se establezca la paternidad y/o la maternidad respecto de una hija o un hijo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación destacó que varios artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño establecen el derecho a la identidad y a conocer la identidad biológica: el artículo 7, inciso 1, prevé el derecho del niñas y niños a conocer a su progenie en la medida de lo posible y el artículo 8, inciso 1, dispone que los Estados deben respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley y sin injerencias ilícitas.
53. Asimismo, destacó que el artículo 4º de la Constitución Federal establece el derecho a la identidad de toda persona y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento, a lo que agregó dicho alto tribunal, que el derecho a la identidad está compuesto a su vez por el derecho a tener un nombre, una nacionalidad y una filiación; que la imagen de una persona está determinada en buena medida por el conocimiento de sus orígenes, su filiación, así como la identificación que tiene en la sociedad a través de un nombre y una nacionalidad¹⁹; y que, en suma, el derecho a la identidad parte del supuesto de que el menor conozca su origen biológico y mantenga las relaciones con sus padres biológicos contribuye a un mejor desarrollo integral de este y, en última instancia, a promover su interés superior vinculado con el derecho a pertenecer a una familia, a una sociedad y a un Estado²⁰.

¹⁹ Tesis emitida por la Primera Sala, de rubro “**DERECHO A LA IDENTIDAD DE LOS NIÑOS**”, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, pág. 1034.

²⁰ Es aplicable la tesis 1a. CCCXX/2014 “**FILIACIÓN. FORMA EN QUE OPERAN LOS PRINCIPIOS RECTORES EN LA MATERIA APLICADOS A CASOS CONCRETOS**”. Esta Primera Sala ha reconocido la existencia de principios rectores en materia de filiación que necesariamente informan la regulación de acciones como la de investigación y reconocimiento de paternidad. Entre estos principios se encuentran, de manera ejemplificativa y no limitativa, la no discriminación entre hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, la verdad biológica, la incompatibilidad entre filiaciones contrapuestas y, de manera preeminente, la protección del interés del hijo. Al respecto, debe tenerse presente que es un derecho del hijo tener su filiación correspondiente, y no una mera facultad de los padres hacerlo posible. Ahora bien, la calificación de estos valores como principios no es gratuita, ya que su protección y reconocimiento presupone que sus exigencias normativas entrarán en conflicto con

54. Por lo recién apuntado, conviene significar que, para efectos de la presente decisión, el principio del interés superior de niñas, niños y adolescentes debe tomarse en cuenta de manera primordial, como lo ordena el artículo 3º²¹ de la Convención sobre los Derechos del Niño y el artículo 4º, párrafos noveno a décimo primero, constitucional²², así como la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación^{23 24}.

otras en casos concretos, supuesto en el que será necesario desarrollar un ejercicio de ponderación para articular el resultado de su aplicación conjunta. En este sentido, los alcances que se le otorguen al derecho a la identidad biológica de una persona en un caso específico, máxime cuando se trata de un menor, tendrán que estar siempre dirigidos a atender su interés; no podrán desvincularse de las circunstancias particulares y podrán variar en la medida en la que varíen los principios en conflicto”, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 10, septiembre de 2014, t. I, p. 578.

²¹ 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.

²² [E]n todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

²³ Tesis aislada 1a. CXLI/2007, “INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. SU CONCEPTO”.

²⁴ Véase tesis 1a. CXXII/2012 “INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU FUNCIÓN NORMATIVA COMO PRINCIPIO JURÍDICO PROTECTOR. La función del interés superior del menor como principio jurídico protector, es constituirse en una obligación para las autoridades estatales y con ello asegurar la efectividad de los derechos subjetivos de los menores, es decir, implica una prescripción de carácter imperativo, cuyo contenido es la satisfacción de todos los derechos del menor para potencializar el paradigma de la “protección integral”. Ahora bien, desde esta dimensión, el interés superior del menor, enfocado al deber estatal, se actualiza cuando en la normativa jurídica se reconocen expresamente el cúmulo de derechos y se dispone el mandato de efectivizarlos, y actualizado el supuesto jurídico para alcanzar la función de aquel principio, surge una serie de deberes que las autoridades estatales tienen que atender, entre los cuales se encuentra analizar, caso por caso, si ante situaciones conflictivas donde existan otros intereses de terceros que no tienen el rango de derechos deben privilegiarse determinados derechos de los menores o cuando en el caso se traten de contraponer éstos contra los de otras personas; el alcance del interés superior del menor deberá fijarse según las circunstancias particulares del caso y no podrá implicar la exclusión de los derechos de terceros. En este mismo sentido, dicha dimensión conlleva el reconocimiento de un “núcleo duro de derechos”, esto es, aquellos derechos que no admiten restricción alguna y, por tanto, constituyen un límite infranqueable que alcanza, particularmente, al legislador; dentro de éstos se ubican el derecho a la vida, a la nacionalidad y a la identidad, a la libertad de pensamiento y de conciencia, a la salud, a la educación, a un nivel de vida adecuado, a realizar actividades propias de la edad (recreativas, culturales, etcétera) y a las

55. El principio del interés superior de niñas, niños y adolescentes mandata la valoración integral de toda posible afectación de los derechos de este grupo de personas frente a un conflicto, esto es, que el análisis de la posible afectación de derechos de la infancia parta de un escrutinio estricto en el que se reconozcan las repercusiones de una afectación respecto de la protección integral de derechos que, además, son de orden público y de interés social, por lo que no es posible dejar de lado la obligación reforzada y prioritaria para el Estado que implica una actuación oficiosa para la protección integral de niñas, niños y adolescentes, en relación con la exhaustividad para atender la causa de pedir y brindar la asistencia y la representación necesarias para el ejercicio de sus derechos, incluso y sobre todo, en sede jurisdiccional.
56. Igualmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que el “interés superior del niño” es un “punto de referencia para asegurar la efectiva realización de todos los derechos contemplados en ese instrumento, cuya observancia permitirá al sujeto el más amplio desenvolvimiento de sus potencialidades²⁵”, y que también constituye un criterio al que “han de ceñirse las acciones del Estado y de la sociedad en lo que respecta a la protección de los niños y a la promoción y preservación de sus derechos²⁶”.
57. Por su parte, el Comité para los Derechos del Niño ha señalado que “el principio del interés superior del niño se aplica a todas las medidas que afecten a los niños y exige medidas activas, tanto para proteger sus derechos y promover su supervivencia, crecimiento y bienestar como para apoyar y asistir a los padres y a otras personas que tengan la responsabilidad cotidiana de la

garantías del derecho penal y procesal penal; además, el interés superior del menor como principio garantista, también implica la obligación de priorizar las políticas públicas destinadas a garantizar el “núcleo duro” de los derechos”, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, libro IX, junio de 2012, t. 1, p.260.

²⁵ Opinión Consultiva OC-17/2002, párrafo 59.

²⁶ Opinión Consultiva OC-17/2002, párrafo 59.

realización de los derechos del niño²⁷”.

58. Así, como principio normativo, el interés superior de niñas, niños y adolescentes tiene tanto una función **justificativa** como **directiva**, ya que, por un lado, sirve para justificar todos los derechos que tienen como objeto su protección, al tiempo que constituye un criterio orientador de toda producción normativa, entendida en sentido amplio y relacionada con los derechos de la niñez y adolescencia, lo que incluye, no solo la interpretación y aplicación del derecho por parte de los jueces, sino también todas las medidas emprendidas por el legislador, así como las políticas públicas, programas y acciones específicas llevadas a cabo por las autoridades administrativas.
59. Con base en lo expuesto, se puede concluir que por interés superior de niñas, niños y adolescentes se entiende el catálogo de valores, principios, interpretaciones, acciones y procesos dirigidos a forjar un desarrollo humano integral y una vida digna, así como a generar las condiciones materiales que permitan a los menores vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar personal, familiar y social posible, cuya protección debe promover y garantizar el Estado en el ejercicio de sus funciones legislativa, ejecutiva y judicial, por tratarse de un asunto de orden público e interés social.
60. Por lo expuesto, debe destacarse que, en todos los asuntos del orden familiar, las personas juzgadoras están obligadas a suplir la deficiencia de las partes en sus planteamientos de derecho y garantizar, de la mejor manera posible, la restitución en el ejercicio de los derechos ya afectados o que, potencialmente, pudieran dañarse²⁸.

²⁷ Observación General N° 7 (2005), párrafo 13.

²⁸ En términos también de la jurisprudencia 1a./J. 18/2014 “**INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL**”. En el ámbito jurisdiccional, el interés superior del niño es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un

61. Vinculado con los principios, derechos y libertades ya mencionados, el párrafo octavo del artículo 4° constitucional reconoce el derecho de todo ser humano a identificarse y distinguirse de otras personas, desde que nace y hasta que muere, lo cual cobra relevancia para una mejor convivencia, ya que ser identificado permite determinar derechos y obligaciones que se adquieren con respecto al Estado, como por las relaciones privadas de la vida diaria.
62. Así, el precepto constitucional protege, de forma expresa, el pleno ejercicio de los derechos inherentes a la identidad, cuyo ejercicio comienza a través del registro de nacimiento, pues ese derecho, por sí solo, provoca el reconocimiento de otros, como son el acceso a un nombre propio; a la filiación, la nacionalidad y el estado civil y político, sin dejar de lado aquellos derechos que se refieren a la integridad física, la educación, al pleno desarrollo emocional, las necesidades alimentarias, entre otros.
63. La identidad permite complementar la dignidad de la persona humana y, por esa razón, se compone por la obligatoriedad del Estado de establecer políticas que permitan a la persona ser diferenciada de otras y, con ello, ser jurídicamente única e irrepetible, como sucede en forma natural y que se logra con una serie de elementos que permiten diferenciarla de otras en el plano normativo, principalmente, con la asignación de un nombre; además de otros elementos como la fecha y lugar de nacimiento, la nacionalidad, nombre de madre(s) y/o padre(s) o el reconocimiento materno y/o paterno.

niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor. Este principio ordena la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que afecten derechos de los menores, el interés superior del niño demanda de los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión”, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, libro 4, marzo de 2014, t. I, p. 406.

64. Asimismo, se convierte en el medio para acceder a otros derechos, tales como salud, educación, trabajo, políticos, seguridad social, etcétera y otorga seguridad tanto a la sociedad en general como a la persona en particular; en consecuencia, el derecho a la identidad es una composición de diversos derechos para acceder a otros, que se compone de un conjunto de datos que identifican a una persona en relación con otra, cuyo registro es indispensable para generar certeza jurídica²⁹.
65. Por todo ello, vinculado con el derecho a fundar una familia y el resguardo al interés superior de niñas, niños y adolescentes, el derecho a la identidad de una persona menor de edad constituye la posibilidad de recibir información sobre su nombre, nacionalidad y filiación, además del ejercicio de un amplio espectro de prerrogativas vinculadas con aquel, tal como lo fijó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el criterio 1a. LXXV/2018 **“DERECHO A LA IDENTIDAD DE UN MENOR. NO SÓLO LO CONSTITUYE LA POSIBILIDAD DE RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE SU NOMBRE, NACIONALIDAD Y FILIACIÓN, PUES A PARTIR DEL RECONOCIMIENTO DE ESTOS DERECHOS SE PUEDEN DERIVAR OTROS**³⁰”.
66. Incluso, se debe destacar que, respecto al derecho a la identidad y la filiación, las personas menores de edad se sitúan en un grupo

²⁹ Cfr. RUBIO CHÁVEZ, Benjamin, “Derecho a la identidad. Un estudio sobre el registro de nacimiento de niños y niñas, hijos e hijas de extranjeros en situación irregular”, Consejo de la Judicatura Federal, Serie Monografías, vol. 5, p.59.

³⁰ Texto: “El derecho humano a la identidad está protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por otros instrumentos internacionales, que constituye un derecho por ser un elemento que le es inherente al ser humano y que puede comprender otros derechos, como el derecho al nombre, a la nacionalidad y a conocer su filiación y origen; sin embargo, el núcleo esencial no sólo lo constituye la posibilidad de solicitar y recibir esa información, sino en que a partir de esos derechos se pueden derivar otros distintos, como son los de alimentación, educación, salud y sano esparcimiento. Así, el papel que juega el derecho a la identidad en los juicios de desconocimiento de paternidad es, en principio, un derecho de los menores, y no una facultad de los padres, por lo que si bien es cierto que en esos procedimientos se cuestiona el origen biológico, en determinadas circunstancias no se tiene que agotar con tal elemento, pues también existen otros a considerar, como la preservación en beneficio del menor de vínculos familiares, ello cuando no hay coincidencia entre el origen biológico y la filiación jurídica. De esta manera, el derecho a la identidad se tiene que adaptar a las circunstancias del caso concreto ya que puede interactuar con otros derechos, como el de protección a la familia o el propio interés superior del menor, todos protegidos por el Estado”, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 55, Junio de 2018, t. II, p. 956.

vulnerable por razón de su edad; de ahí que dependa el ejercicio de su derecho de la voluntad de otras personas, como sus progenitores, tutores o quienes les custodian. Más aún, a pesar de existir intención y deseo de estos últimos, el ejercicio eficaz queda a decisión del Estado, de quien penden los mecanismos legales que, en algunos casos, no guardan compatibilidad e impiden la observancia plena de estos derechos.

67. Al respecto, es relevante señalar que, nuevamente, la Primera Sala de la Corte³¹ ha establecido que la identidad de los niños se configura no solo por el reconocimiento de su origen biológico, sino por su realidad social; por lo que si bien estos resultan de enorme trascendencia, lo cierto es que la formación de la identidad se construye, también, a través de múltiples factores psicológicos y sociales de la manera en la que el individuo se concibe y los rasgos definitorios de su personalidad se nutren sensiblemente de los valores y principios que le transmiten las personas significativas para él en sus primeros años de vida³²³³.

³¹ Amparo directo en revisión 2750/2010.

³² 1a. XLIV/2012 **"DERECHO A LA IDENTIDAD. SU PROTECCIÓN DESDE EL DERECHO A LA SALUD FÍSICA Y MENTAL.** El derecho a la salud mental se encuentra en estrecha relación con el derecho a la identidad, en tanto es relevante para el individuo el conocer su origen biológico para la debida formación de su personalidad. En efecto, el desconocer el origen biológico puede generar problemas personales, psiquiátricos y de desarrollo de la personalidad, por lo que el conocimiento de dichos orígenes está protegido tanto desde el derecho a la identidad como del derecho a la salud mental. Por otro lado, en determinadas circunstancias, el saber quién es el padre o madre puede revelar información relevante para ayudar a prevenir o a tratar las afectaciones médicas de los hijos, por lo que el conocimiento del origen biológico incide en la protección del derecho a la salud física, en su vertiente de prevención y tratamiento de enfermedades", *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro VI, Marzo de 2012, t. 1, p. 274.

³³ 1a. LXXIII/2017 **"DERECHO A LA IDENTIDAD DE LOS MENORES. INJERENCIA DE LA REALIDAD SOCIAL.** La identidad del menor se configura no sólo por el reconocimiento de su origen biológico sino por su realidad social. La importancia de conocer los orígenes biológicos de una persona fue explicada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. XLIV/2012 (10a.), en el que se señaló que la imagen propia de la persona está determinada, en buena medida, por el conocimiento de sus orígenes biológicos, los cuales resultan de enorme trascendencia desde el punto de vista psicológico. No obstante, debe señalarse que la identidad no se agota en lo biológico. La formación de la identidad se construye a través de múltiples factores psicológicos y sociales de la manera en la que el individuo se concibe y los rasgos definitorios de su personalidad se nutren sensiblemente de los valores y principios que le transmiten las personas significativas para él en sus primeros años de vida. De este modo, los vínculos que establece el menor con sus padres -no en el sentido de que contribuyeron a su concepción biológica, sino en el sentido de que, de hecho, forman parte de su realidad interpersonal- son fundamentales en la construcción de su identidad. En esa línea, el derecho a la identidad del menor no se satisface exclusivamente con el reconocimiento de un vínculo biológico, sino que también se garantiza a través del

68. De este modo, los vínculos que establece la persona menor de edad con su progenie -no en el sentido de que contribuyeron a su concepción biológica, sino en el sentido en que, de hecho, forman parte de su realidad interpersonal- son fundamentales en la construcción de su identidad.
69. En esa línea, el derecho a la identidad de los niños no se satisface exclusivamente con el reconocimiento de un vínculo biológico, sino que también se garantiza a través del reconocimiento a su realidad social, pues es el contexto en el que vivirá y se desarrollará lo que determina quién es y cómo se percibe frente a los demás.
70. El artículo 7º de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por el Estado Mexicano y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991) dispone que el niño tiene derecho, desde que nace, a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. En concordancia con lo anterior, el numeral 6 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes³⁴, establece diversos principios que protegen el derecho de los menores.

reconocimiento a su realidad social, pues es el contexto en el que creció el menor lo que determina quién es y cómo se percibe frente a los demás”, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, libro 43, junio de 2017, t. I, p. 580.

³⁴ “**Artículo 6.** Para efectos del artículo 2 de esta Ley, son principios rectores, los siguientes:

- I. El interés superior de la niñez.
- II. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes, conforme a lo dispuesto en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como en los tratados internacionales;
- III. La igualdad sustantiva;
- IV. La no discriminación;
- V. La inclusión;
- VI. El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo;
- VII. La participación;
- VIII. La interculturalidad;
- IX. La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades;
- X. La transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales;
- XI. La autonomía progresiva;
- XII. El principio pro persona;
- XIII. El acceso a una vida libre de violencia;
- XIV. La accesibilidad, y
- XV. El derecho al adecuado desarrollo evolutivo de la personalidad.”

71. A su vez, los artículos 13, fracción III³⁵ y 19³⁶ de dicha Ley establecen el derecho a la identidad, el cual consiste en que las niñas, niños y adolescentes, desde su nacimiento, tienen derecho a: a) contar con nombre y los apellidos que les correspondan, así como a ser inscritos en el Registro Civil respectivo de forma inmediata y gratuita, y a que se les expida en forma ágil y sin costo la primer copia certificada del acta correspondiente, en los términos de las disposiciones aplicables; b) contar con nacionalidad, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales; c) conocer su filiación y su origen, en la medida de lo posible y siempre que ello sea acorde con el interés superior de la niñez, y; d) preservar su identidad, incluidos el nombre, la nacionalidad y su pertenencia cultural, así como sus relaciones familiares.
72. De este modo, las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las alcaldías de la Ciudad de

³⁵ “**Artículo 13.** Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:
(...)”

III. Derecho a la identidad. (...)”

³⁶ “**Artículo 19.** Niñas, niños y adolescentes, en términos de la legislación civil aplicable, desde su nacimiento, tienen derecho a:

I. Contar con nombre y los apellidos que les correspondan, así como a ser inscritos en el Registro Civil respectivo de forma inmediata y gratuita, y a que se les expida en forma ágil y sin costo la primer copia certificada del acta correspondiente, en los términos de las disposiciones aplicables;

II. Contar con nacionalidad, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales;

III. Conocer su filiación y su origen, en la medida de lo posible y siempre que ello sea acorde con el interés superior de la niñez, y

IV. Preservar su identidad, incluidos el nombre, la nacionalidad y su pertenencia cultural, así como sus relaciones familiares.

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán colaborar en la búsqueda, localización y obtención de la información necesaria para acreditar o restablecer la identidad de niñas, niños y adolescentes.

Las Procuradurías de Protección, en el ámbito de sus respectivas competencias, orientarán a las autoridades que correspondan para que den debido cumplimiento al presente artículo.

Cuando haya procesos o procedimientos que deriven en cambio de apellidos de niñas, niños y adolescentes, éstos tendrán el derecho a opinar y a ser tomados en cuenta, conforme a su

edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.

La falta de documentación para acreditar la identidad de niñas, niños y adolescentes no será obstáculo para garantizar sus derechos.”

México, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán colaborar en la búsqueda, localización y obtención de la información necesaria para acreditar o restablecer la identidad de niñas, niños y adolescentes. Se destaca que la falta de documentación para acreditar la identidad de niñas, niños y adolescentes no será obstáculo para garantizar sus derechos.

73. Así, el hecho de que el menor tenga la certeza de quién es su progenie, constituye un principio de orden público que es parte del núcleo esencial del derecho fundamental a la personalidad jurídica, cuya importancia no solo radica en la posibilidad de solicitar y recibir información sobre su origen, la identidad de sus progenitores y el conocimiento de su origen genético, sino que a partir de esos elementos puede derivarse, por una parte, su derecho a tener una nacionalidad y, por otra, el derecho a que sus ascendientes satisfagan sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, para su desarrollo pleno e integral, tal como lo explica la tesis 1a. CXLII/2007 “**DERECHO A LA IDENTIDAD DE LOS MENORES. SU CONTENIDO**”³⁷.
74. Ahora, como último derecho relevante a vincular con los expuestos a lo largo de esta sentencia, la relación que de hecho y por razón natural existe entre la madre, el padre y la hija o el hijo se conoce, jurídicamente como filiación; es decir, se trata de la

³⁷ Texto: “El artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por el Estado Mexicano y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991) dispone que el niño tiene derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. En concordancia con lo anterior y conforme al numeral 3 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (de orden público, interés social y observancia obligatoria para toda la República), son principios rectores de la protección de los menores, entre otros, el del interés superior de la infancia y el de la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garantías constitucionales. En ese tenor, el artículo 22 de dicha Ley establece el derecho a la identidad, el cual se compone por el derecho a tener un nombre y los apellidos de los padres desde que nazca, a tener una nacionalidad y a conocer su filiación y su origen, salvo en el caso que las leyes lo prohíban. Así, el hecho de que el menor tenga la certeza de quién es su progenitor, constituye un principio de orden público que es parte del núcleo esencial del derecho fundamental a la personalidad jurídica, cuya importancia no sólo radica en la posibilidad de solicitar y recibir información sobre su origen, la identidad de sus padres y el conocimiento de su origen genético, sino que a partir de esos elementos puede derivarse, por una parte, su derecho a tener una nacionalidad y, por otra, el derecho a que sus ascendientes satisfagan sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, para su desarrollo pleno e integral”, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXVI, julio de 2007, p. 260.

situación creada entre ambos progenitores y su prole, que provocan la generación de un conjunto de relaciones jurídicas permanentes entre aquellos y estos.

75. Por ende, la filiación implica un conjunto de derechos y obligaciones que, respectivamente, se crean entre la progenie y la prole que, generalmente, constituyen tanto una filiación legítima como un estado jurídico. Es decir, una situación permanente que el derecho reconoce por virtud del hecho jurídico de la procreación para mantener vínculos constantes entre la madre, el padre y las hijas e hijos³⁸.
76. Para el establecimiento de la maternidad y la paternidad, el punto de partida y regla general es que la maternidad se determina por el solo hecho del nacimiento. Esto no significa que la maternidad solo se establece por el nacimiento, pues aunque esta regla reconoce que el vínculo biológico entre la persona recién nacida y la madre se basa en el hecho imperante de que la mujer gestante de un bebé necesariamente aportaba su óvulo para la procreación, lo que permitía suponer que la mujer que lo par tenía un vínculo genético con el feto. Esta suposición era la mejor prueba del vínculo biológico cuando no se contaba con los conocimientos ni tecnologías necesarias para realizar pruebas en materia genética, ni las técnicas de reproducción asistida.
77. Por su parte, la paternidad, antes de la existencia de pruebas en materia genética, era incierta respecto al vínculo biológico; por lo que, para resolver ese problema se desarrollaron, principalmente, **tres instituciones jurídicas**: la presunción de paternidad, el reconocimiento de hijo y la posesión del estado de hijo.
78. En todas estas, la filiación se encontraba relacionada con el principio de verdad biológica. Dicho de otro modo, al menos tradicionalmente, bastaba que una persona fuera cónyuge de la

³⁸ Rojina Villegas, Rafael, Compendio de Derecho Civil, Introducción, Personas y Familia, 30ª edición, Porrúa, México, 2001, p. 457.

madre de un hijo y lo reconociera como tal o se comportara como padre, para que se considerara que el vínculo biológico realmente existe. La filiación establecida en razón de tales instituciones prevalece a pesar de la inexistencia del vínculo biológico, con tal de garantizar el resto de principios y finalidades relacionados con la filiación.

79. Ahora, el desarrollo de técnicas de reproducción asistida como la fertilización in vitro, provocan que, salvo pruebas científicas en contrario, no pueda establecerse con certeza que la mujer que gesta y alumbró a una persona, tenga un vínculo genético con esta; por tanto, es importante acudir a las formas de filiación que la Corte debió interpretar para interpretar el reconocimiento y la presunción de paternidad.
80. En efecto, al resolver la contradicción de tesis (hoy contradicción de criterios 435/2011), señaló que, para proteger a los menores nacidos dentro de matrimonios o concubinatos, los códigos civiles suelen disponer que una vez establecida la filiación materna se presume, salvo prueba en contrario, la paterna, aun cuando el presunto padre no sea en realidad el biológico, por lo que se le concede la acción de desconocimiento para desvirtuar la presunción dentro de cierto plazo.
81. Por otro lado, sostuvo que, ante la imposibilidad de prever la presunción respecto de los hijos nacidos fuera del matrimonio o concubinato, era necesario el reconocimiento de las hijas e hijos por parte del padre, la madre o de ambos, puesto que el reconocimiento es un acto unilateral, personalísimo y formal, en ocasiones solemne, por el que se asumen voluntariamente las obligaciones derivadas de la paternidad, aun cuando no existan vínculos biológicos reales involucrados.
82. Además, para garantizar el principio de verdad biológica, se permite al presunto padre ejercer una acción para desvirtuar la presunción, pero no tiene la obligación de hacerlo en caso de que

no sea el padre biológico. También se permite a ciertos sujetos impugnar la paternidad correspondiente, salvo que, como sucede con la voluntad procreacional o el reconocimiento voluntario de la hija o hijo no biológica, la acción de desconocimiento sea improcedente.

83. También es importante mencionar que es común que se establezcan plazos de caducidad para ejercitar estas acciones, por lo que, una vez superados, las normas privilegian la estabilidad familiar y una identidad filiatoria consolidada sobre la verdad biológica³⁹; por ende, que se pruebe en estos procedimientos la inexistencia del vínculo biológico no necesariamente tiene como consecuencia la modificación de la filiación jurídica de la menor de edad, ya que esto dependerá de lo que exija su interés superior en el caso particular.
84. En el reconocimiento de hijas e hijos, se insiste, lo anterior es todavía más claro. Con el reconocimiento, una mujer o un hombre asumen las obligaciones derivadas de la maternidad y la paternidad para el adecuado desarrollo de las personas menores de edad y, en consecuencia, el reconocimiento suele ser irrevocable, incluso cuando no existe el vínculo biológico con el menor.
85. Si bien es cierto que en varios casos se ha establecido que el reconocimiento puede anularse por error, engaño o incapacidad, lo cierto es que demostrar la inexistencia de un vínculo biológico con el menor es insuficiente para acreditar la existencia de un error en la celebración del reconocimiento; aspectos que pueden dilucidarse mediante la impugnación de paternidad o

³⁹Tesis 1a. XCVI/2018 (10a.) emitida por la Primera Sala, de rubro “**INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR Y DERECHO A LA IDENTIDAD. LA AUSENCIA DE VÍNCULO BIOLÓGICO EN LA RELACIÓN PATERNO FILIAL NO ES SUFICIENTE PARA SUSTENTAR LA IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD**”, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 57, agosto de 2018, t. I, p. 1027.

maternidad⁴⁰; todo lo cual es trascendental, porque mediante el reconocimiento de hijos se asumen los derechos y obligaciones derivados de la maternidad/paternidad, independientemente de que exista un vínculo biológico entre el autor del reconocimiento y el reconocido.

86. Por ello, el hecho de que no exista un vínculo biológico no permite establecer que hubo error, ya que el reconocimiento no presupone su existencia. Lo que se tendría que acreditar es el motivo determinante de la voluntad para celebrar el reconocimiento, así como la existencia de un error respecto de ese motivo determinante de la voluntad que no sea imputable al propio autor del reconocimiento. De nuevo, para tutelar la verdad biológica se proporciona a algunos sujetos el derecho a controvertir la paternidad derivada del reconocimiento, pero esto debe hacerse dentro del plazo establecido para ello.
87. En suma -destacó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación-, las reglas de los códigos civiles no establecen un sistema simple que únicamente permite establecer filiación extrajudicialmente o judicialmente a través de procreación o la adopción, ni que únicamente pretenda tutelar el principio de verdad biológica.
88. El sistema de reglas pretende establecer distintos mecanismos para garantizar que el menor conozca su origen biológico, pero también establece reglas que protegen la estabilidad familiar e identidades filiatorias consolidadas, así como permiten que personas que no tienen ese vínculo se hagan cargo del niño y

⁴⁰ Entre otras disposiciones del Código Civil para la Ciudad de México, se encuentran los artículos 60 y 336, que disponen:

Artículo 60. El padre y la madre están obligados a reconocer a sus hijos. [...] La investigación tanto de la maternidad como de la paternidad, podrá hacerse ante los tribunales de acuerdo a las disposiciones relativas a este Código.
[...]

Artículo 336. En el juicio de impugnación de la paternidad o la maternidad, serán oídos, según el caso, el padre, la madre y el hijo, a quien, si fuere menor, se le proveerá de un tutor interino, y en todo caso el Juez de lo Familiar atenderá el interés superior del menor.”

cumplan con aquellos requisitos necesarios para su adecuado desarrollo.

89. Es por ello que se permite el establecimiento de la filiación jurídica incluso ante la falta de vínculo biológico, pero a la vez se establecen acciones para que, en caso de que surja una controversia derivada de la no correspondencia de la filiación biológica con la jurídica, los tribunales puedan conocerla, ponderar los intereses y principios en conflicto, y resolver qué exige el interés superior de la menor; de tal suerte que la no existencia del vínculo biológico entre la madre y/o padre intencional y una persona menor de edad no es suficiente para negar el establecimiento de la filiación legal entre ellas.
90. En la ley civil para esta ciudad, aun de forma tangencial, sí hay fuentes legales para reconocer la existencia de las técnicas de reproducción asistida y el atributo de la filiación, como son los artículos 162, 293, 326 y 329 que disponen:

“Artículo 162. Los cónyuges están obligados a contribuir cada uno por su parte a los fines del matrimonio y a socorrerse mutuamente. Los cónyuges tienen derecho a decidir de manera libre, informada y responsable el número y espaciamiento de sus hijos, así como emplear, en los términos que señala la ley, cualquier método de reproducción asistida, para lograr su propia descendencia. Este derecho será ejercido de común acuerdo por los cónyuges.”

[...]

Artículo 293. El parentesco por consanguinidad es el vínculo entre personas que descienden de un tronco común. **También se da parentesco por consanguinidad, entre el hijo producto de reproducción asistida y el hombre y la mujer, o sólo ésta, que hayan procurado el nacimiento para atribuirse el carácter de progenitores o progenitora. Fuera de este caso, la donación de células germinales no genera parentesco entre el donante y el hijo producto de la reproducción asistida.** En el caso de la adopción, se equiparará al parentesco por consanguinidad aquél que existe entre el adoptado, el adoptante, los parientes de éste y los descendientes de aquél, como si el adoptado fuera hijo consanguíneo.”

[...]

Artículo 326. El cónyuge varón no puede impugnar la paternidad de los hijos que durante el matrimonio conciba su cónyuge mediante técnicas de fecundación asistida, si hubo consentimiento expreso en tales métodos.”

[...]

Artículo 329. Las cuestiones relativas a la paternidad del hijo nacido después de trescientos días de la disolución del matrimonio, podrán promoverse, de conformidad con lo previsto en este Código, en cualquier tiempo por la persona a quien perjudique la filiación; pero esta acción no prosperará, si el cónyuge consintió expresamente en el uso de los métodos de fecundación asistida a su cónyuge.”

91. Lo anterior, incluso, fue parte del análisis en un precedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se examinaron temas sobre reproducción asistida y sus consecuencias en la filiación (amparo directo en revisión 2766/2015), donde se indicó:

“136. En la legislación bajo la cual se resolvió el caso que ocupa a esta Primera Sala, se regulan, aunque en forma genérica, el uso de las técnicas de reproducción asistida, pues en los artículos 162, 293, 326 y 329 del Código Civil para la Ciudad de México, se establece lo siguiente:

[...]

138. Como se ve, el Código Civil para la Ciudad de México tampoco contempla las diferencias que existen entre las distintas técnicas de reproducción asistida, sólo se refiere a ellas de manera tangencial, incidental e indirecta. Dentro de este vacío normativo, no existe una regla especial que establezca los requisitos que deberán de cumplirse para el acceso a las mismas; **sin embargo, sí se regula una cuestión fundamental, esta es, la relativa a que entre el menor que nazca bajo esos métodos y los sujetos que dieron su voluntad para su concepción, surgirá un parentesco igual a aquel que surge por consanguinidad (artículo 293).**”

92. En ese tenor, de acuerdo con estos principios, la coincidencia entre filiación biológica y filiación legal no siempre es posible, ya sea por los supuestos de hecho o porque en el caso deben prevalecer otros intereses que son jurídicamente más relevantes. Se estableció que en el primer grupo de supuestos se encuentran la filiación adoptiva y las procreaciones asistidas por donación de

gametos⁴¹; mientras que el segundo está conformado por normas que se ocupan de la determinación extrajudicial de la filiación o que privilegian un estado de familia consolidado en el tiempo⁴².

93. Por ejemplo, cuando acontece una adopción o filiación adoptiva, el acto jurídico crea un vínculo de parentesco entre una o dos personas, de tal forma que establece entre ellas una relación de paternidad y/o de maternidad.
94. La adopción es un procedimiento legal mediante el cual niñas, niños o adolescentes son acogidos en una familia con el propósito de ofrecerles afecto, cuidados, educación, protección y un ambiente propicio para su desarrollo. Al ser adoptados, se establece un vínculo equivalente al de familia consanguínea entre el adoptado y la familia adoptante y, por ello, se dice que se trata de una adopción **plena**⁴³, la cual provoca que las personas menores de edad formen parte de la familia consanguínea del adoptante, para todos los efectos legales, al tiempo que se extingue el parentesco con la familia de origen. A la adopción plena le son aplicables las normas sobre parentesco genético y, por ende, el adoptado en forma plena se desvincula totalmente de su familia consanguínea.
95. Además, los padres adoptivos asumen los mismos derechos y responsabilidades respecto a la persona y bienes del adoptado que los padres biológicos respecto a sus hijos. Del mismo modo,

⁴¹ Se ha establecido que en estos casos uno de los factores determinantes para establecer la filiación es la voluntad procreacional. Al respecto se reitera el contenido de la tesis 1a. LXXVIII/2018 emitida por la Primera Sala, de rubro **"VOLUNTAD PROCREACIONAL. CONSTITUYE UN FACTOR DETERMINANTE EN LA FILIACIÓN DE UN NIÑO O UNA NIÑA QUE NACIÓ BAJO UN PROCEDIMIENTO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL HETERÓLOGA"**, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 55, junio de 2018, t. II.

⁴² Tesis 1a. CCCXXI/2014 emitida por la Primera Sala, de rubro **"FILIACIÓN. ALCANCES Y LÍMITES DEL PRINCIPIO DE VERDAD BIOLÓGICA"**, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 10, septiembre de 2014, t. I, p. 577.

⁴³ A diferencia de la adopción simple que solo crea vínculo entre la personas adoptante y adoptada, pero sin extenderse el parentesco al resto de la familia del adoptante.

el adoptado adquiere los mismos derechos y obligaciones hacia los padres adoptivos, como lo haría un hijo biológico.

96. Este procedimiento se encuentra previsto en el Título Décimo Quinto del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, denominado “de la jurisdicción voluntaria”, artículos del 923 al 925⁴⁴, en el que se establece que una vez que se cumplan

⁴⁴ “**Artículo 923.** El que pretende adoptar deberá acreditar los requisitos determinados por el Código Civil, debiendo observar lo siguiente:

I. En la promoción inicial se deberá manifestar si se trata de adopción nacional o internacional, mencionándose, el nombre, edad y si lo hubiere, el domicilio del menor o persona con incapacidad que se pretenda adoptar, el nombre, edad y domicilio de quienes en su caso ejerzan sobre él la patria potestad o tutela, o de la persona o institución de asistencia social pública o privada que lo haya recibido y acompañar certificado médico de buena salud de los promoventes y del menor.

Los estudios socioeconómicos y psicológicos necesarios para efectuar el trámite de adopción deberán realizarse por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, o por quien este autorice, siempre que se trate de profesionistas que acrediten tener título profesional y tener como mínimo dos años de experiencia en la atención de menores y personas susceptibles de adoptar.

También los podrán realizar la Secretaría de Salud, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para los efectos de adopción nacional.

II. Cuando el menor hubiere sido acogido por una institución de asistencia social pública o privada, el presunto adoptante o la institución exhibirá, según sea el caso, constancia oficial del tiempo de exposición, la Sentencia ejecutoriada que haya decretado la terminación de la patria potestad o en su defecto, como consecuencia del abandono, la sentencia ejecutoriada que haya decretado la pérdida de este derecho.

III. Si hubieran transcurrido menos de los tres meses de la exposición, se decretará la guarda y custodia provisional de quien se pretende adoptar con el o los presuntos adoptantes, entre tanto se consuma dicho plazo;

IV. Si no se conociera el nombre de los padres o no hubiere sido acogido por institución de asistencia social, pública o privada, se decretará la custodia con el presunto adoptante, por el término de tres meses para los mismos efectos.

En el supuesto de que el menor haya sido entregado a dichas instituciones por quienes ejerzan en él la patria potestad, para promover su adopción, no se requerirá que transcurra el plazo de tres meses a que se refiere el presente artículo y,

V. Tratándose de extranjeros con residencia en el país, deberán acreditar su solvencia moral y económica con las constancias correspondientes, sin necesidad de presentar testigos.

Los extranjeros con residencia en otro país deberán acreditar su solvencia moral y económica y presentar certificado de idoneidad expedidos por la autoridad competente de su país de origen que acredite que el o los solicitantes son considerados aptos para adoptar; constancia de que el menor que se pretende adoptar ha sido autorizado para entrar y residir permanentemente en dicho Estado; deberán durante el procedimiento acreditar su legal estancia en el País y la autorización de la Secretaría de Gobernación para llevar a cabo una adopción.

La documentación que presenten los solicitantes extranjeros en idioma distinto al español, deberá acompañarse de la traducción oficial.

La documentación correspondiente deberá estar apostillada o legalizada por el Cónsul mexicano.

VI. En el auto admisorio que le recaiga a la solicitud inicial de adopción, el Juez señalará fecha para la audiencia, la que se deberá desahogar dentro de los diez días siguientes al mismo.”

“**Artículo 924.** Rendidas las constancias que se exigen en el artículo anterior y obtenido el consentimiento de las personas que deban darlo, conforme al Código Civil, el Juez de lo Familiar resolverá dentro del tercer día, lo que proceda sobre la adopción.

La sentencia consentida por los promoventes causará ejecutoria.”

los requisitos determinados por el código sustantivo; se hagan constar las particularidades del caso de adopción; se lleve a cabo la audiencia respectiva; se rindan las constancias que se exigen y se obtenga el consentimiento de las personas que deban darlo, el Juez de lo Familiar resolverá dentro del tercer día lo que proceda sobre la adopción. Se destaca que la sentencia consentida por los promoventes causará ejecutoria.

97. En vinculación con las técnicas de reproducción asistida, el proceso de adopción es muy relevante en circunstancias de gestación subrogada, puesto que es indispensable que, al existir vínculo genético entre la persona gestante con la recién nacida, se desplacen los derechos de filiación de aquella a favor de la madre o el padre intencional, cuando así fue estipulado en un acuerdo de voluntades.
98. Dicho desplazamiento se llevará cabo a través del proceso de adopción plena, el cual, en casi todas las legislaciones del país, requiere el consentimiento de quien ejerce la patria potestad, la tutela, de la persona que hubiere acogido durante 6 meses a quien pretende adoptar y la trate como hija o hijo (a falta de patria potestad o tutela), del ministerio público (a falta de todas las antes señaladas), de las instituciones de asistencia social públicas o privadas de acogida, de la persona que se pretende adoptar si tiene más de 12 años; así como todos los requisitos administrativos que deben tramitarse ante el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia.
99. Una vez que se colman todos los requisitos legales, la autoridad judicial resolverá sobre la adopción a través de la jurisdicción voluntaria al tratarse de un acto que no suscita controversia alguna. Sin embargo, a pesar de que esta figura procesal, por

“Artículo 925. Una vez iniciado el procedimiento de adopción, el Juez velará para que las actuaciones judiciales en todo momento sean continuas, evitando bajo su más estricta responsabilidad la inactividad procesal, quedando obligado a presenciar y dirigir de manera personal cada una de las diligencias y actuaciones que se practiquen en el proceso y no podrá delegar dicha obligación en persona alguna. El incumplimiento de tal obligación será causa de responsabilidad para el Juez.”

regla general, no implica condena ni constitución de derechos sustantivos porque no es un procedimiento de contención, lo cierto es que, lógicamente, tiene efectos que deben ser atendidos, como es la expedición de un acta de nacimiento y la adecuación de demás documentos personales que reflejen la realidad familiar y social de la persona a su realidad jurídica, para lo cual resulta indispensable que la autoridad judicial remita copia certificada de las diligencias relativas a la autoridad del Registro Civil a fin de que levante el acta correspondiente⁴⁵.

- 100. No obstante, en el caso de gestación por sustitución, la adopción no puede llevarse a cabo, debido a que la persona con capacidad de gestar no tiene relación biológica con la persona menor de edad, mientras que quienes tienen la intención de ser la prole de este último pueden, en algún supuesto, compartir la información genética, pero, en otro, solo tener voluntad procreacional, como acontece, particularmente, en este asunto.
- 101. Así, precisadas las normas que regulan el procedimiento de adopción, es viable considerar, en forma analógica, que en casos como el que nos ocupa, en el que no hay motivo de confronta entre las partes, la gestación por sustitución se lleve a cabo por medio de las diligencias de jurisdicción voluntaria, las que pueden culminar con la sentencia que ordene a la persona titular del Registro Civil la emisión del acta correspondiente, tal como se destacará más adelante:

C. Resolución al caso concreto.

⁴⁵ Como lo dispone la mayoría de las legislaciones civiles. A manera de ejemplo se aprecia en los artículos 84, tanto del Código Civil Federal como del de la Ciudad de México que disponen:
“**Artículo 84.** Dictada la resolución judicial definitiva que autorice la adopción, el Juez, dentro del término de **ocho días**, remitirá copia certificada de las diligencias al Juez del Registro Civil que corresponda, a fin de que, con la comparecencia del adoptante, se levante el acta correspondiente”.
“**Artículo 84.** Dictada la resolución judicial definitiva que autorice la adopción, el Juez, dentro del término de **tres días**, remitirá copia certificada de las diligencias al Juez del Registro Civil que corresponda, a fin de que, con la comparecencia del adoptante, se levante el acta correspondiente”.

102. Al retomar las consideraciones apuntadas en el sub-apartado que antecede, el artículo 340⁴⁶ del Código Civil para la Ciudad de México establece que la filiación de los hijos se prueba con el acta de nacimiento, a la vez que la emisión de este documento está estrechamente ligada al reconocimiento de paternidad y maternidad, el cual, en términos del artículo 369⁴⁷ del mismo ordenamiento, deberá hacerse en la partida de nacimiento, por acta especial, por escritura pública, por testamento o por confesión judicial directa y expresa, ante la persona titular del Registro Civil.
103. Este reconocimiento presupone un reconocimiento voluntario de paternidad y la presunción de vínculo biológico de la madre que gesta, aunque esa implicación ha tenido sus matices relacionados con la reproducción asistida.
104. En efecto, de conformidad con el diverso numeral 54⁴⁸ del código sustantivo invocado, las declaraciones de nacimiento se harán presentando a la niña o el niño ante el Registro Civil en su oficina o en el lugar donde hubiere nacido, acompañando el **certificado de nacimiento**; documento que deberá ser suscrito por médico autorizado para el ejercicio de su profesión o persona que haya

⁴⁶ **Artículo 340.** La filiación de los hijos se prueba con el acta de nacimiento.

⁴⁷ **Artículo 369.** El reconocimiento de un hijo deberá hacerse por alguno de los modos siguientes;

I. En la partida de nacimiento, ante el Juez del Registro Civil;

II. Por acta especial ante el mismo juez;

III. Por escritura pública;

IV. Por testamento;

V. Por confesión judicial directa y expresa.

El reconocimiento practicado de manera diferente a las enumeradas no producirá ningún efecto; pero podrá ser utilizado como indicio en un juicio de investigación de paternidad o maternidad.

⁴⁸ **Artículo 54.** Las declaraciones de nacimiento se harán presentando al niño ante el Juez del Registro Civil en su oficina o en el lugar donde aquel hubiera nacido, acompañando el certificado de nacimiento. El certificado de nacimiento deberá ser suscrito por médico autorizado para el ejercicio de su profesión, o persona que haya asistido el parto, en el formato expedido para tal efecto por la Secretaría de Salud del Distrito Federal, el cual contendrá los datos que establezca el Reglamento del Registro Civil. Dicho certificado hace prueba del día, hora y lugar del nacimiento, sexo del nacido y de la maternidad.

En caso de no contar con certificado de nacimiento, el declarante deberá presentar constancia de parto en los términos que lo establezca el Reglamento del Registro Civil. Cuando por causas de fuerza mayor, de conformidad con lo que establezca el reglamento, no se cuente con certificado de nacimiento o constancia de parto, deberá presentar denuncia de hechos ante el Ministerio Público donde se haga constar las circunstancias de los hechos.

asistido el parto, en el formato expedido para tal efecto por la Secretaría de Salud del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), el cual contendrá los datos que establezca el Reglamento del Registro Civil. Dicho certificado hace prueba del día, hora y lugar del nacimiento, sexo y maternidad.

105. Como se verá más adelante, **las disposiciones normativas que regulan el certificado de nacimiento no se ajustan a la realidad social que impera en situaciones de reproducción asistida de fecundación in vitro en la modalidad de gestación sustituta.**
106. De acuerdo con la Ley General de Salud⁴⁹, artículos 389, fracción I Bis, 389 Bis, 389 Bis 1 y 392, últimos dos párrafos, el certificado de nacimiento se expedirá para cada persona nacida viva una vez comprobado el hecho. Para tales efectos, se entenderá por “vivo” al producto de la concepción expulsado o extraído de forma completa del cuerpo de “su madre”, independientemente de la duración del embarazo, que después de dicha separación respire

⁴⁹ **Artículo 389.-** Para fines sanitarios se extenderán los siguientes certificados: (...) **I Bis.** De nacimiento; (...).

Artículo 389 Bis.- El certificado de nacimiento se expedirá para cada nacido vivo una vez comprobado el hecho. Para tales efectos, se entenderá por nacido vivo, al producto de la concepción expulsado o extraído de forma completa del cuerpo de su madre, independientemente de la duración del embarazo, que después de dicha separación respire o dé cualquier otra señal de vida como frecuencia cardíaca, pulsaciones de cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria, tanto si se ha cortado o no el cordón umbilical y esté o no desprendida la placenta.

El certificado de nacimiento será expedido por profesionales de la medicina o personas autorizadas para ello por la autoridad sanitaria competente.

Artículo 389 Bis 1.- El certificado de nacimiento será requerido por las autoridades del Registro Civil a quienes pretendan declarar el nacimiento de una persona, con las excepciones que establezcan las disposiciones generales aplicables.

Artículo 392.- Los certificados a que se refiere este título, se extenderán en los modelos aprobados por la Secretaría de Salud y de conformidad con las normas oficiales mexicanas que la misma emita. Dichos modelos serán publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Las autoridades judiciales o administrativas sólo admitirán como válidos los certificados que se ajusten a lo dispuesto en el párrafo anterior. La Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y los Servicios Estatales de Salud, en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con la normatividad que se expida para tal efecto, llevarán a cabo acciones necesarias para la implementación de los certificados a que se refiere este Título, incluyendo las relacionadas con la captura, generación e intercambio de la información relacionada con la expedición de dichos certificados y de acuerdo a lo dispuesto por el Título Sexto.

La distribución primaria de los certificados de nacimiento, defunción y muerte fetal a que hace mención el artículo 389 de esta Ley estará a cargo de la Secretaría de Salud.

o dé cualquier otra señal de vida como frecuencia cardíaca, pulsaciones de cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria, tanto si se ha cortado o no el cordón umbilical y esté o no desprendida la placenta.

107. El certificado de nacimiento será expedido por profesionales de la medicina o personas autorizadas para ello por la autoridad sanitaria competente y será requerido por las autoridades del Registro Civil a quienes pretendan declarar el nacimiento de una persona, con las excepciones que establezcan las disposiciones generales aplicables.
108. Por su parte, de conformidad con los puntos 3.13, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.10 y 11.11 de la Norma Oficial Mexicana NOM-035-SSA3-2012⁵⁰, en materia de información en salud, el

⁵⁰ **3.13** Certificado de Nacimiento.- Formato único nacional establecido por la Secretaría de Salud, de expedición gratuita y obligatoria, con carácter individual e intransferible, que hace constar el nacimiento de un nacido vivo y las circunstancias que acompañaron el hecho.

11.3 Para todo nacido vivo cuyo nacimiento haya ocurrido en territorio nacional es obligatoria su certificación, para lo cual debe utilizarse el formato vigente del Certificado de Nacimiento. Los nacidos vivos cuyo nacimiento haya ocurrido en el extranjero quedan excluidos de la expedición del Certificado de Nacimiento.

11.4 Para todo nacido vivo cuyo nacimiento haya ocurrido en territorio nacional, el Certificado de Nacimiento es requisito indispensable para el trámite del Acta de Nacimiento.

El Certificado de Nacimiento no debe ser confundido con el Acta de Nacimiento.

El Certificado de Nacimiento no debe ser utilizado en sustitución o como complemento del Acta de Nacimiento para fines legales o administrativos.

11.5 El Certificado de Nacimiento está conformado por un original y dos copias.

Con objeto de asegurar la integración de la información y el registro de los nacidos vivos ocurridos se establece lo siguiente:

11.5.1 El original se entrega a la madre del nacido vivo, o a quien corresponda a falta de ésta, con la indicación de que a su vez se entregue en el Registro Civil para la obtención del Acta de Nacimiento correspondiente, quedando bajo resguardo del mismo.

11.5.2 La primera copia permanece en la unidad médica en la que se expidió el Certificado para los fines que correspondan, la segunda copia se entrega al área de captura correspondiente para garantizar la integración de la información en el SINAC, de conformidad con los términos y procedimientos establecidos por la DGIS.

11.5.3 Para el caso de nacidos vivos certificados fuera de una unidad médica del SNS, el certificante está obligado a remitir las dos copias a los SESA, en un período no mayor a los diez días hábiles posteriores a la expedición.

11.6 El Certificado de Nacimiento debe ser expedido por única vez a todo nacido vivo en territorio nacional (independientemente de la nacionalidad o situación legal de los padres), en forma gratuita y obligatoria, por un médico con cédula profesional o por la persona facultada por la autoridad sanitaria correspondiente.

Antes de su expedición es indispensable que el certificante haya corroborado el nacimiento, el vínculo madre-hijo(a) y verificado la identidad de la madre mediante una identificación oficial, o a falta de esta última, con el documento respectivo expedido por la autoridad competente.

11.7 El Certificado de Nacimiento debe expedirse según las circunstancias que acompañen al nacimiento de conformidad con lo siguiente:

Certificado de Nacimiento es entendido como aquel formato único nacional establecido por la Secretaría de Salud, de expedición gratuita y obligatoria, con carácter individual e intransferible, que hace constar el nacimiento de un nacido vivo y las circunstancias que acompañaron el hecho.

109. Ese formato debe encontrarse vigente, ya que es un requisito indispensable para el trámite del acta de nacimiento. Además, el certificado de nacimiento no debe sustituirse con el acta de nacimiento, ni para fines legales ni administrativos y se expide en original y dos copias. En él se hacen constar las circunstancias

11.7.1 Si el nacimiento ocurrió en una unidad médica del SNS, el Certificado de Nacimiento debe ser expedido obligatoriamente dentro de la unidad en las primeras veinticuatro horas después de ocurrido el nacimiento, por el médico que atendió al nacido vivo después del parto.

En este caso el Certificado de Nacimiento debe ser entregado a la madre (o quien corresponda a falta de ésta) al egreso de la misma o antes de transcurridas veinticuatro horas después de ocurrido el nacimiento, lo que ocurra primero.

11.7.2 Si el nacimiento ocurrió fuera de una unidad médica del SNS y fue atendido con la asistencia de una partera facultada por alguna institución del SNS para expedir el Certificado de Nacimiento, ésta debe emitirlo dentro de las primeras veinticuatro horas después de ocurrido el nacimiento y entregarlo inmediatamente a la madre (o quien corresponda a falta de ésta).

11.7.3 Si el nacimiento ocurrió fuera de una unidad médica del SNS y fue atendido por personal no facultado para la expedición del Certificado de Nacimiento:

11.7.3.1 Si la madre recibió atención prenatal en una unidad médica de alguna institución del SNS, a solicitud de la madre, dicha institución es la responsable de expedir el Certificado, siempre y cuando el vínculo madre-hijo(a) pueda ser corroborado por el certificante, de lo contrario se está sujeto a lo dispuesto en el numeral 11.7.3.3.

11.7.3.2 Si la madre no recibió atención prenatal, es responsabilidad de los SESA establecer los mecanismos que garanticen la expedición del Certificado de Nacimiento, siempre y cuando el vínculo madre-hijo(a) pueda ser corroborado por el certificante, de lo contrario se estará sujeto a lo dispuesto en el numeral 11.7.3.3.

11.7.3.3 Si el vínculo madre-hijo no puede ser constatado por el certificante, se debe acudir a la autoridad competente, quien debe corroborar dicho vínculo; una vez hecho lo anterior es responsabilidad de los SESA establecer los mecanismos que garanticen la expedición del Certificado de Nacimiento.

11.8 Para todos los casos anteriores, antes de la expedición del Certificado de Nacimiento el certificante debe consultar la historia clínica de la madre y sus documentos de identificación oficial para garantizar el correcto llenado del mismo; en caso de no existir la historia clínica, el certificante debe auxiliarse con los datos proporcionados por la madre, o a falta de ésta, por un familiar directo.

11.10 En tanto se realiza el trámite del Acta de Nacimiento, las instituciones públicas del SNS pueden, cuando las disposiciones jurídicas aplicables que les rigen así lo autoricen, utilizar el Certificado de Nacimiento para fines de afiliación provisional a los programas públicos.

11.11 El profesional de la salud o persona facultada por la autoridad sanitaria correspondiente que expida un Certificado de Nacimiento debe estar capacitada para su correcto llenado y es considerada responsable de la información contenida en el mismo para los efectos de esta norma y demás disposiciones jurídicas aplicables. Cualquier variación dolosa entre los hechos ocurridos y lo asentado en un Certificado de Nacimiento, es objeto de sanción conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Los SESA deben prohibir a cualquier certificante, temporal o definitivamente según la gravedad o reincidencia, la expedición de Certificados de Nacimiento y suspenderle la entrega de formatos, cuando se detecten anomalías en su uso y manejo, desviaciones con respecto a lo asentado en la presente norma y demás disposiciones jurídicas aplicables o calidad deficiente de la información contenida en los mismos.

que acompañan al nacimiento y se entregará a la “madre”, entendida como la persona que gesta.

110. En dichos numerales también se prevé que, antes de la expedición del certificado de nacimiento, el certificante debe consultar la historia clínica de la madre y sus documentos de identificación oficial para garantizar el correcto llenado del mismo; en caso de no existir la historia clínica, el certificante debe auxiliarse con los datos proporcionados por la madre, o a falta de esta, por un familiar directo.
111. En tanto se realiza el trámite del acta de nacimiento, las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud pueden, cuando las disposiciones jurídicas aplicables que les rigen así lo autoricen, utilizar el certificado de nacimiento para fines de afiliación provisional a los programas públicos. El profesional de la salud o persona facultada por la autoridad sanitaria correspondiente que expida un certificado de nacimiento debe estar capacitada para su correcto llenado y es considerada responsable de la información contenida en el mismo para los efectos de esta norma y demás disposiciones jurídicas aplicables.
112. La norma oficial mexicana en comento **ninguna regulación contiene respecto de la gestación subrogada o sustituta**, aunque en el Manual de Llenado del Certificado de Nacimiento⁵¹ se mencionan las situaciones de adopción y de “maternidad subrogada” (pero no a la gestación sustituta), en cuyo caso se establece que el certificado de nacimiento debe expedirse a nombre de la persona gestante del menor nacido vivo, so pena de incurrir en alguna conducta indebida. Tal como se aprecia del siguiente extracto:

“En situación de adopción o de maternidad subrogada, el Certificado Nacimiento debe expedirse a nombre de la madre gestante del nacido vivo. La

⁵¹ Modelo 2015, vigente para el caso que se resuelve.

contravención a lo dispuesto en este lineamiento será sancionado conforme a las penas a que se hagan acreedores de conformidad a lo establecido en la legislación penal vigente de cada entidad federativa, y tratándose de servidores públicos, además a lo señalado en las Leyes de Responsabilidades de Servidores Públicos que correspondan.”

113. Esa discrepancia normativa con relación a la realidad social que impera en tratándose de los diversos métodos de reproducción asistida ha dado cabida a múltiples impugnaciones por parte de los justiciables, en donde, con el fin de obtener un acta de nacimiento, generan un acto de autoridad que atribuyen al Director del Registro Civil que corresponda y, ante una emisión negativa, reclaman en la vía del juicio de amparo indirecto la negativa de registro y la expedición del acta correspondiente.
114. Esa ha sido la solución en muchos litigios al problema que se plantea, pues incluso se ha pretendido otorgar la suspensión de oficio y de plano en conformidad con lo dispuesto en el artículo 126, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, con arreglo a los cuales la medida se decretará cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, pues se encuentran afectaciones semejantes relacionados con el derecho fundamental del menor a su identidad, lo que incluso ha motivado que con fundamento en el diverso numeral 147 de la ley en cita, se conceda la suspensión de forma restitutoria a fin de que el juez de distrito dicte las medidas urgentes y necesarias para salvaguardar la identidad de la persona menor de edad y ordene la expedición de un acta de nacimiento “provisional”; aspecto que, en definitiva, quedará supeditado a la emisión de la ejecutoria de amparo correspondiente.
115. Sin embargo, como se explicó al inicio de este considerando, la falta de medios legales y procesales para llevar a cabo el reconocimiento de hijas e hijos nacidos bajo la técnica de gestación sustituta, obliga a los tribunales del Poder Judicial de la

Federación a reconocer y proteger el derecho a la tutela judicial efectiva, el cual puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión.

116. En este sentido, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condiciones irracionales o carentes de lógica constitucional, pues de establecer cualquiera, esta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador.
117. Pero el pleno ejercicio del derecho de acceso a la justicia, también puede truncarse ante la falta de presupuestos fácticos para acceder a un medio de defensa específico, en defensa de determinados derechos fundamentales.
118. En esta medida, es claro que no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida:

cumplimiento de los plazos legales, agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos.

119. En estos términos, el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción debe entenderse como una variante también del derecho de petición, que se actualiza cuando esta se dirige a las autoridades jurisdiccionales, motivando su pronunciamiento.
120. Luego, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo importante en cada caso será que, para concluir que existe un verdadero acceso a la jurisdicción o a los tribunales, es necesario que se verifique la inexistencia de impedimentos jurídicos o fácticos que resulten carentes de racionalidad, proporcionalidad o que resulten discriminatorios.
121. En el particular, la adecuación tanto en los aspectos materiales, como en los aspectos procesales e interpretativos dentro de los procesos en que se conjugan los derechos a fundar una familia, el libre desarrollo de la personalidad, el interés superior de niñas, niños y adolescentes en su vertiente de filiación, reconocimiento e identidad, debe encontrar cabida en el aparato de justicia.
122. La jurisdicción voluntaria ha sido considerada como un conjunto variado de actos y procedimientos que se realizan ante funcionarios judiciales. Dichos procedimientos tienen como característica común la ausencia de conflicto entre partes y, por tanto, la jurisdicción voluntaria es opuesta a la contenciosa, en tanto se ejerce unilateralmente o por el consentimiento de las partes involucradas, en un procedimiento en el que el litigio está ausente o, a veces, latente pero nunca presente.
123. La jurisdicción voluntaria puede definirse como la función que ejercen las personas juzgadoras, a solicitud de una o varias

personas, en los casos especialmente previstos en la ley y que tiene como finalidad **cooperar en el nacimiento de determinadas relaciones jurídicas, sin conflicto.**

124. El operador jurídico encargado de la función jurisdiccional, además, tiene a su cargo otras funciones de distinta naturaleza, como es el caso de la jurisdicción voluntaria, que por su especial naturaleza faculta a quienes ejercen la jurisdicción autorizar o solemnizar ciertos actos, distintos de la actividad de juzgamiento. Los asuntos de jurisdicción voluntaria, como se ha dicho, carecen de conflicto, elemento fundamental de la verdadera jurisdicción ordinaria. **Su base radica en que el o los peticionarios de mutuo acuerdo acuden ante una autoridad pública para que autorice o solemnice determinado acuerdo.**
125. Una particularidad que distingue a la jurisdicción voluntaria de la contenciosa es la inexistencia de partes, ya que las denominaciones de actor y demandado se da en virtud de un conflicto de intereses que conforman al litigio entendido tradicionalmente como el conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de los interesados y la resistencia del otro⁵².
126. José de Vicente y Caravantes define la jurisdicción voluntaria como la que ejerce el juez en actos o asuntos que, o por su naturaleza o por el estado en que se hallan, no admiten contradicción de parte, emanando su parte intrínseca de los mismos interesados, que acuden ante la autoridad judicial, la cual se limita a dar fuerza y valor legal a aquellos actos por medio de su intervención o de sus providencias, procediendo sin las formalidades esenciales de los juicios⁵³, mientras que Lino Enrique Palacio (Manual de Derecho Procesal Civil) al referirse a la jurisdicción voluntaria, se manifiesta en los siguientes términos:

⁵² Carnelutti, Francesco, Sistema de Derecho Procesal Civil, trad. Niceto Alcalá-Zamora y Castillo y Santiago Sentís Melendo, Ed. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 2005, tomo I, página 44.

⁵³ Cabanellas, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual (Tomo V), Buenos Aires, Editorial Heliasta, 1978, página 605.

"Tradicionalmente se designa así a la función que ejercen los jueces con el objeto de integrar, constituir o acordar eficacia a ciertos estados o relaciones jurídicas privadas. Como ya se ha destacado, se trata de una función ajena al normal cometido de los órganos judiciales, el cual consiste en la resolución de los conflictos jurídicos suscitados entre dos o más personas⁵⁴".

127. En relación con las actividades que ejecuta la juzgadora, en referencia a la definición anterior, se encuentran tres actividades fundamentales: "integrar, constituir o acordar eficacia a ciertos estados o relaciones jurídicas privadas", por lo que en ese tipo de diligencias el órgano jurisdiccional actúa con la única finalidad de solemnizar, autorizar o garantizar cualquier derecho en estricto cumplimiento, en actos carentes de controversias y de esta manera dar la trascendencia para los posteriores efectos que surgen de los actos no contenciosos.
128. Respecto del ejercicio de la jurisdicción voluntaria, Devis Echandía destaca la falta de desacuerdo y la explica que "La jurisdicción voluntaria se ejercita a solicitud de una persona que necesita darle legalidad a una actuación o certeza a un derecho, o por varias, pero sin que exista desacuerdo entre ellas al hacer tal solicitud y sin que se pretenda vincular u obligar a otra persona con la declaración que haga la sentencia⁵⁵".
129. Otros autores, como Calamandrei, otorgan un carácter intermedio a la jurisdicción voluntaria entre la función jurisdiccional y administrativa, al decir que: "...entre la función jurisdiccional y la administrativa, está la llamada jurisdicción voluntaria; la cual, aun siendo, como veremos enseguida, función sustancialmente administrativa, es subjetivamente ejercida por órganos judiciales y, por eso, se designa tradicionalmente con el nombre equívoco de jurisdicción, si bien acompañado con el atributo de voluntaria que

⁵⁴ Palacio, Enrique, Manual de Derecho Procesal Civil, Buenos Aires, Editorial Abeledo-Perrot, página 87.

⁵⁵ Devis, Echandía, Compendio de Derecho Procesal, Bogotá, Editorial ABC, 1978, página 70.

tiene la finalidad de distinguirla de la verdadera y propia jurisdicción...⁵⁶

130. Respecto al tema, Alfredo Rocco explica lo siguiente: "la jurisdicción voluntaria forma parte de la actividad administrativa del Estado y explica su razón de ser en la siguiente forma: a) Una de las maneras de proveer a la tutela de los intereses humanos, es conceder eficacia jurídica a la voluntad privada; b) Dicha eficacia puede estar subordinada a determinadas condiciones de forma o de tiempo, y especialmente a una confirmación de parte del Estado sobre la conveniencia o legalidad del acto; c) La jurisdicción voluntaria tiene como fin llevar a cabo esa confirmación, que en algunos casos se confía al órgano jurisdiccional, pero que no por ello deja de ser actividad administrativa; d) Mientras que la jurisdicción contenciosa tiene por objeto remover los obstáculos para la satisfacción de los intereses particulares y presupone una relación jurídica concreta ya formada, en la voluntaria sucede lo contrario, el Estado interviene para la formación de las relaciones jurídicas concretas, acreditando en forma solemne, la conveniencia o legalidad del acto que se va a realizar o se ha realizado ya⁵⁷".

131. Sobre la base de los aspectos doctrinales apuntados, se obtiene que la jurisdicción voluntaria es el conjunto de procedimientos a través de los cuales se solicita de una autoridad que fiscalice, verifique o constituya una situación jurídica de trascendencia social en beneficio del o los participantes, situación que se mantiene en tanto no cambien las circunstancias del negocio que les dio origen y mientras no surja una cuestión litigiosa o controvertida, donde quien tiene la jurisdicción participa en forma imparcial e independiente con el objeto de generar un vínculo jurídico resultante por su intervención, a pesar de la inexistencia de conflicto de intereses entre el o los solicitantes.

⁵⁶ Calamandrei, Piero, Instituciones de Derecho Procesal Civil, Bogotá, Editorial Leyer, S.A., página 64.

⁵⁷ Citado por Eduardo Pallares, Diccionario de Derecho Procesal Civil, vigésima quinta edición actualizada, páginas 516 y 517, Editorial Porrúa, S.A. México, 1999.

132. Los artículos del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México que regulan la procedencia de las diligencias de jurisdicción voluntaria, disponen:

Artículo 893. La jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que por disposición de la ley o por solicitud de los interesados se requiere la intervención del juez sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas.

A solicitud de parte legítima (sic) podrían practicarse en esta vía las notificaciones o emplazamientos necesarios en procesos extranjeros.

Artículo 894. Cuando fuere necesaria la audiencia de alguna persona, se la citará conforme a derecho, advirtiéndole en la citación que quedan, por tres días, las actuaciones en la Secretaría del Juzgado para que se imponga de ellas y señalándole día y hora para la audiencia, a la que concurrirá el prominente, sin que sea obstáculo para la celebración de ella la falta de asistencia de éste.”

Artículo 895. Se oirá precisamente al Ministerio Público:

I. Cuando la solicitud promovida afecte los intereses públicos;

II. Cuando se refiera a la persona o bienes de menores o incapacitados;

III. Cuando tenga relación con los derechos o bienes de un ausente;

IV. Cuando lo dispusieren las leyes.

Artículo 896. Si a la solicitud promovida se opusiere parte legítima después de efectuado el acto de la jurisdicción voluntaria se reservará el derecho al opositor para que lo haga valer en la vía y forma que corresponda.

Artículo 897. El juez podrá variar o modificar las providencias que dictare, sin sujeción estricta a los términos y formas establecidas respecto de la jurisdicción contenciosa.

No se comprenden en esta disposición los autos que tengan fuerza de definitivos y contra los que no se hubiere interpuesto recurso alguno, a no ser que se demostrara y que cambiaron las circunstancias que afectan el ejercicio de la acción.

Artículo 898. Las providencias de jurisdicción voluntaria serán apelables, en ambos efectos si el recurso lo interpusiere el promovente de las diligencias, y sólo en el devolutivo de tramitación inmediata cuando el que recurre hubiere venido al expediente voluntariamente o llamado por el juez, o para oponerse a la solicitud que haya dado motivo a su formación.

Artículo 899. Las apelaciones en jurisdicción voluntaria se sustanciarán en la forma y términos previstos en el Título Décimo Segundo del presente Código.

Artículo 900. Toda cuestión que surja en los negocios a que se refieren los capítulos siguientes, y haya de resolverse en juicio contradictorio, se substanciará en la forma determinada para los incidentes, a no ser que la ley dispusiere otra cosa.

Artículo 901. En los negocios de menores incapacitados intervendrán el juez de pupilar y los demás funcionarios que determine el Código Civil.

Artículo 901 Bis. La institución pública o privada de asistencia social que reciba a un menor para ser dado en adopción, deberá, en forma inmediata, presentar por escrito solicitud ante Juez Familiar, haciendo de su conocimiento esta circunstancia, acompañando a dicha solicitud el acta de nacimiento del menor. El Juez bajo su más estricta y personal responsabilidad ordenará, de manera inmediata, en un plazo que no exceda de cinco días hábiles, la comparecencia del representante legal de la institución y de la persona o las personas que ejerzan la patria potestad, con la intervención del Ministerio Público. A efecto de que la comparecencia se lleve a cabo de manera pronta, el Juez dictará las medidas de apremio a que se refiere el artículo 973 del presente Código, que estime más eficaces, sin seguir orden alguno.

Ratificada que sea por las partes dicha solicitud, se declarará de oficio la terminación de la patria potestad y la tutela del menor quedará a cargo de la Institución.”

133. De los referidos textos normativos se desprende, en lo que interesa, que la jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que por disposición de la ley o por solicitud de los interesados se requiere la intervención del juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas, so pena de reservar el derecho al opositor para que lo haga valer en la vía y forma que corresponda.
134. Por lo anterior, se puede considerar a la jurisdicción voluntaria como una actividad jurisdiccional “extralitigiosa”, que se caracteriza por la inexistencia de una confrontación de intereses, requisito indispensable para el surgimiento del litigio; es decir, es un procedimiento de mera constatación o demostración de hechos o circunstancias en el que no es legalmente posible ejercitar

acciones respecto de las cuales proceda oponer excepciones, ya que aquella solo es procedente cuando no se plantea o suscita controversia alguna o conflicto entre partes determinadas, pues de existir, deberá ejercitarse en jurisdicción contenciosa y no en la voluntaria.

135. Consecuentemente, lo relevante en un procedimiento seguido en jurisdicción voluntaria es la ausencia de controversia, litigio o conflicto, que no tiene partes en sentido estricto, porque el peticionario o pretensor no pide algo contra nadie; le falta, pues, un adversario. Tampoco tiene controversia, y si esta apareciere por oposición a la pretensión del promovente, el acto judicial se transforma en contencioso, cuya característica es llevar en potencia, al menos, la contienda.
136. En el caso, los padres intencionales, ambos de nacionalidad española, y la persona gestante sustituta, de nacionalidad mexicana, por su propio derecho, promovieron diligencias de jurisdicción voluntaria respecto de la “**maternidad sustituta**”, cuyo objeto era para que el juzgador tuviera conocimiento, paso a paso, del estado que guardaría la gestación y luego de que se verificara el alumbramiento, para que se ordenara al Registro Civil en la Ciudad de México levantar el acta de nacimiento correspondiente con el reconocimiento de los padres intencionales como progenitores del hijo que naciera, en virtud de que estaba manifiesta su voluntad procreacional, de buena fe, sin ánimo de lucro y sin controversia alguna entre los que suscribieron el contrato de maternidad sustituta, ratificado el 23 de marzo de 2021, ante el Notario Público 188 de la Ciudad de México, de acuerdo al acta 39,974, de la propia fecha; ello mediante la exhibición ante el juzgado de origen, durante el trámite de las diligencias y hasta el alumbramiento (nacimiento), de todos los documentos que acreditaran el éxito de la transferencia e implantación embrionaria, el estatus del embarazo con exámenes médicos, de los pagos para cubrir los gastos de análisis clínicos,

atención médica, medicamentos y gastos hospitalarios.

137. Cabe señalar que si bien es cierto que la solicitud de un acta de nacimiento sobre un hecho futuro de realización incierta no es viable en ninguna instancia judicial, pues no es posible reconocer todos los derechos a un evento que no ha sucedido; también lo es que, al momento en que se promovió el juicio de amparo indirecto se verificó el nacimiento de un niño que, a la fecha, carece de documento que constate y reconozca los derechos fundamentales que le reconoce la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte.

138. También se pone en relieve que, en el contrato relativo, se precisó:

“**PRIMERA.** Objeto. Las partes convienen en llevar a cabo dentro de los próximos 90 (noventa) días la implantación de un embrión obtenido previamente mediante fertilización in vitro como producto de las células germinales de los padres contratantes, en el útero de la mujer gestante sustituta, para que ella lleve el embarazo a término hasta el parto, a efectuarse por el procedimiento que recomiende el médico tratante, a excepción del caso en que de manera prematura se interrumpa o se ponga término al mismo cuando el médico lo determine por razones estrictamente necesarias”.

139. De lo que se advierte que se trató de una técnica de reproducción asistida por fertilización in vitro, en la que ambos padres intencionales proporcionaron espermatozoides para fecundar un óvulo que, aparentemente, no provenía de la persona con capacidad de gestar, sino de una donadora, sin que se advierta de constancia alguna ni del contrato que las personas involucradas tuvieran conocimiento de cuál de los espermatozoides proporcionados fue el que fecundó, con éxito, el ovocito presuntamente.

140. Lo anterior es importante para atender la causa de pedir de la parte quejosa, la cual estriba, de acuerdo con lo establecido en el

artículo 941 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, que en todos los asuntos del orden familiar juzgadores y tribunales están obligados a suplir la deficiencia de las partes en sus planteamientos de derecho, así como en el derecho a la identidad y al interés superlativo de las personas menores de edad, **en un reconocimiento de paternidad**, mediante la instauración del procedimiento de jurisdicción voluntaria que es, ordinariamente, el medio para hacerlo en los procesos de adopción, incluidos los relacionados con gestación subrogada.

141. Ese reconocimiento de paternidad pretendido por los quejosos no se puede lograr a través del acceso directo al Registro Civil, pues como ha quedado reseñado, el certificado de nacimiento, de acuerdo con la Ley General de Salud y con el manual para su llenado que expide la Secretaría de Salud, los datos de la persona recién nacida llevan el nombre de la persona que la gesta, es decir la que da a luz, sin que exista la menor posibilidad de que en esa instancia se investigue sobre quiénes son los padres biológicos y/o con voluntad procreacional.
142. El reconocimiento de la paternidad de una persona menor de edad como hijo de los padres intencionales está protegido por el derecho a la identidad. Este derecho no se reduce a conocer el origen biológico de la persona menor de edad, sino también a procurar la estabilidad de las relaciones familiares o privilegiar estados de familia consolidados en el tiempo.
143. En ese sentido, existe un lazo de parentesco igual al de consanguinidad entre la persona menor de edad y quienes buscan sea reconocida su paternidad a través de la voluntad procreacional. Esto es, la manifestación de voluntad en reconocerla y ejercer la copaternidad.
144. Esta premisa parte de considerar que si bien es verdad que el derecho a la identidad de los menores de edad contempla entre

sus prerrogativas el derecho a que su filiación jurídica coincida con sus orígenes biológicos, y por ello, la tendencia tendría que inclinarse a hacer prevalecer el principio de verdad biológica; también es cierto que ello no es una regla irrestricta, pues cuando lo anterior no es posible por los supuestos de hecho en que se encuentre el menor o porque deban imponerse intereses más relevantes como la estabilidad de las relaciones familiares o privilegiar estados de familia consolidados en el tiempo, es válido que la filiación jurídica se determine prescindiendo del vínculo biológico, pues la identidad de los menores depende de múltiples factores y no solo del conocimiento y/o prevalencia de relaciones biológicas.

145. Por tanto, cuando padres intencionales no desean saber con quién de ellos guarda vínculo biológico el recién nacido, basta la manifestación de voluntad de ambos padres intencionales en reconocer al hijo y ejercer la copaternidad, para considerar que existe la voluntad de asumir los deberes parentales material y jurídicamente, con todo lo que ello implica⁵⁸. Esta expresión de voluntad, desde luego, puede realizarse a través de la jurisdicción voluntaria, en aquellos casos en que no exista contención alguna

⁵⁸1a. LXXXVII/2019, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 71, Octubre de 2019, t. II, p. 1157. **"DERECHO A LA REPRODUCCIÓN ASISTIDA. LO TIENEN LAS PAREJAS DE MATRIMONIOS HOMOSEXUALES.** De los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como 14, numeral 1, apartado b, del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", y en atención a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe reconocerse el derecho de las parejas de matrimonios homosexuales para convertirse en padres o madres mediante el acceso a los adelantos de la ciencia en materia de reproducción asistida. Lo anterior es así porque el concepto de familia cuya protección ordena la Constitución no se identifica ni limita a un solo tipo de familia, sino a ésta entendida como realidad social, por lo que la tutela se extiende a todas sus formas y manifestaciones, entre ellas, las formadas por matrimonios homosexuales. Además, porque la decisión de las personas para ser padre o madre en el sentido genético o biológico, corresponde al ámbito del derecho a la vida privada y a la familia, en la que no debe haber injerencias arbitrarias por parte del Estado, lo cual se relaciona con la autonomía reproductiva y el acceso a los beneficios del progreso científico y tecnológico, que implica el derecho a ser informados y a tener libre elección y acceso a métodos para regular la fecundidad, que sean seguros, eficaces, de fácil acceso y aceptables. Y como ese derecho se entiende dado a toda persona, sin distinción en cuanto preferencia sexual, no sólo les asiste a los matrimonios heterosexuales con problemas de infertilidad, sino también a los matrimonios homosexuales, en los que se presenta una situación similar, ante la circunstancia de que en su unión sexual no existe la posibilidad de la concepción de un nuevo ser, entendida como la fecundación del óvulo (gameto femenino) por el espermatozoide (gameto masculino).

ni derecho litigioso que dilucidar.

146. La adecuación tanto en los aspectos materiales, como en los aspectos procesales e interpretativos dentro de los procesos en que participen las niñas, niños y adolescentes supone que la voluntad en ejercicio del libre desarrollo de la personalidad en el seno de una familia homoparental, debe ser el elemento determinante para establecer la filiación de los hijos que nacen en ese contexto familiar, con absoluta exclusión del sexo, género, orientación sexual, estado civil, raza, origen étnico o nacionalidad de las personas y de la existencia de un vínculo genético, por ser ello lo más acorde al interés superior del menor; concretamente en lo que concierne a la prerrogativa de la constitución de su filiación jurídica respecto de sus ascendientes, con el cúmulo de derechos que de esta derivan vinculados con la configuración del nombre, el registro de nacimiento, derechos de nacionalidad, derechos alimentarios y sucesorios y a ser cuidado por ellos.
147. Por tanto, el que se prive de realizar ese reconocimiento mediante la instauración del procedimiento de jurisdicción voluntaria, donde se hace patente la voluntad de los futuros padres de establecer lazos de filiación (consanguínea o de reconocimiento), sin contención, limita la constitución de la filiación jurídica y a privilegiar la estabilidad familiar y el acceso inmediato del menor a las prerrogativas de la filiación jurídica frente a quienes asumen para con él deberes parentales; por tanto, se excluye de su protección a los menores de edad que nacen en contextos de uniones familiares homoparentales y ello la torna inconstitucional por resultar contraria al interés superior del menor y a constituir una franca discriminación hacia los padres.
148. Es por ello que se sostiene que las diligencias de jurisdicción voluntaria son un medio adecuado para realizar el reconocimiento de maternidad y/o paternidad en casos donde no hay contención de intereses de filiación. Postura que encuentra sustento, además,

en lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo en revisión 2766/2015⁵⁹, en el que se establecieron los elementos que se deben tomar en cuenta cuando la niña o el niño nació como consecuencia de un tratamiento de inseminación artificial heteróloga, para garantizar el derecho a la identidad de un menor.

149. En ese precedente se consideró que el derecho a la identidad de un menor, contemplado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando se empleó un tratamiento por inseminación artificial heteróloga, se dota de contenido bajo una doble connotación: en primer lugar, respecto de las consecuencias jurídicas que surgen por quienes se someten a esos tratamientos; y en segundo lugar, en relación con el impacto que se produce en los hijos nacidos bajo esas técnicas.
150. Al estar en presencia de un tratamiento por inseminación artificial heteróloga, como técnica a través de la cual las personas tanto en lo individual como en pareja pueden ejercer su derecho a formar una familia, lo primero que habría que verificarse es en cuál de esas dimensiones (la individual o en pareja) se realizó el tratamiento; después de ello, resultará necesario determinar si existió o no consentimiento de la persona que no aportó material genético, pues ello constituirá uno de los elementos para integrar

⁵⁹ 1a. LXXVII/2018 “**DERECHO A LA IDENTIDAD DE UN MENOR. ELEMENTOS QUE SE DEBEN TOMAR EN CUENTA CUANDO EL NIÑO O LA NIÑA NACIÓ POR CONSECUENCIA DE UN TRATAMIENTO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL HETERÓLOGA.** El derecho a la identidad de un menor, contemplado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando se empleó un tratamiento por inseminación artificial heteróloga, se dota de contenido bajo una doble connotación: en primer lugar, respecto de las consecuencias jurídicas que surgen por quienes se someten a esos tratamientos; y en segundo lugar, en relación con el impacto que se produce en los hijos nacidos bajo esas técnicas. Así, al estar en presencia de un tratamiento por inseminación artificial heteróloga, como técnica a través de la cual las personas tanto en lo individual como en pareja pueden ejercer su derecho a formar una familia, lo primero que habrá que verificar es en cuál de esas dimensiones (la individual o en pareja) se realizó el tratamiento; después de ello, resultará necesario determinar si existió o no consentimiento de la persona que no aportó material genético, pues ello constituirá uno de los elementos para integrar la filiación de un hijo nacido bajo esa técnica de reproducción asistida. Hecho lo anterior, el operador jurídico tendrá elementos para fijar las consecuencias jurídicas del acto, las cuales deberán ser asumidas, precisamente, bajo la doble connotación mencionada y tomando en cuenta que la mejor decisión será aquella que atienda al interés superior del menor”, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, libro 55, junio de 2018, t. II, p. 955.

la filiación de un hijo nacido bajo esa técnica de reproducción asistida.

151. En el caso, se itera, los recurrentes pretendieron que el juez de origen tuviera conocimiento, paso a paso, del estado de gestación previsto en el contrato de maternidad sustituta de 23 de marzo de 2021, celebrado entre los recurrentes ante notario público y que, al nacer el menor producto de la gestación (como sucedió), se ordenara al Registro Civil que expidiera el acta de nacimiento correspondiente, con el nombre de los padres intencionales.
152. Se estima que en las diligencias de jurisdicción voluntaria, por tanto, el operador jurídico tendrá elementos para fijar las consecuencias jurídicas del acto, las cuales deberán ser asumidas, precisamente, al tomar en cuenta que la mejor decisión será aquella que atienda a la realidad que se quiere validar y al cúmulo de derechos y libertades de las personas que la solicitan, con posibilidad de corroborar la certeza del acto mediante la práctica de las pruebas que estime pertinentes, dadas las amplias facultades que en derecho de familia goza el operador jurídico.
153. En efecto, no puede soslayarse que el reconocimiento pretendido emana de una solicitud carente de litigio, puesto que constituye, únicamente, el escrutinio por parte de la autoridad competente de los requisitos implementados para llevar a cabo la gestación sustituta y con ello validar el nacimiento de determinadas relaciones jurídicas, con ausencia de controversia y de parte contendiente, por lo que el proceso de reconocimiento de paternidad derivado del procedimiento de gestación sustituta planteado vía jurisdicción voluntaria es idóneo para que la autoridad analice las particularidades del asunto y el cumplimiento de la normatividad aplicable, con el objeto que se verifique la satisfacción de los requisitos para la validación del acto, mediante el estudio pormenorizado de la cuestión planteada, porque el juzgador debe verificar el cumplimiento de ciertas exigencias, en

atención precisamente a que se trata del derecho a la filiación que, además, es de orden público, debido a la importancia del interés superlativo de la persona menor de edad.

154. Derivado de ese ejercicio, es posible solicitar al Registro Civil extienda un acta de nacimiento, previa la constatación de esos hechos, como consecuencia de haber prosperado el reconocimiento de paternidad, pues aun cuando se piense que se le ordena a aquel hacer un acto sin mediar intervención alguna, lo cierto es que el juez de lo familiar ante quien se promueve el procedimiento de jurisdicción voluntaria ya verificó la celebración de un contrato de maternidad sustituta y todos los documentos relacionados con la constatación de ese hecho hasta darle certeza, en el entendido de que la intervención que se dé al Registro Civil debe estar dotada de calidad intrínseca con relación al hecho que se pretende controlar, pero no respecto de la falta de legislación específica, pues precisamente es lo que se pretende evitar en observancia del interés superlativo de los menores de edad.
155. Esto es, no se habla de una condena en sí misma, sino de un acto tendente a garantizar el registro del nacimiento de un menor, lo más inmediatamente posible, en concordancia con lo que dispone el artículo 4º de la Constitución Federal, que establece el derecho a la identidad de toda persona y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento, sobre todo si esa solicitud proviene de un procedimiento en el que todas las partes que participan en el contrato de maternidad sustituta tienen interés en su validación, pues su objeto es la intervención del Juez para dotar de mayor fuerza al acto jurídico y culminarlo, incluso, con su registro.
156. Esto encuentra sustento, precisamente, porque el juez interviene posteriormente a la celebración del acto para que este tenga eficacia legal, **de ahí que el carácter diferencial de la jurisdicción voluntaria es su fin constitutivo**, porque en ella se

tiende a la concreción de nuevos estados jurídicos o al desenvolvimiento de relaciones ya existentes, donde el órgano jurisdiccional interviene para acreditar, en forma solemne, la conveniencia del acto realizado, ya que el referido procedimiento de reconocimiento planteado no sugiere la configuración de pretensiones opuestas, sino que se trata de un procedimiento en el que únicamente se verifica la voluntad de constituir el derecho de filiación respecto del menor ya nacido y que culmine con su registro en pro de su derecho a la identidad.

157. Sin que las particularidades de este procedimiento, como son las relativas a que la resolución que en torno al reconocimiento de maternidad o paternidad tendrá el carácter de una sentencia y que esta constituirá cosa juzgada, resulten relevantes para excluir la viabilidad de la jurisdicción voluntaria, pues lo esencial es que se cumple la característica básica de ausencia de litigio; pero, con el fin de garantizar los derechos fundamentales del menor es procedente que esa validación encuentre su fin último que es el registro y en la obtención de su acta de nacimiento.
158. En el entendido de que en el momento en que exista un punto de contención, el procedimiento de jurisdicción voluntaria cesará para dar paso a una contienda propiamente dicha. Con lo que, a su vez, se respeta la intervención de terceros que, eventualmente, se encuentren afectados con el derecho de filiación que se pretende constituir.
159. Sin embargo, no debe perderse de vista que la causa que origina el procedimiento es el reconocimiento derivado de un contrato de gestación sustituta en el que se hace patente la voluntad de las partes de que a través del reconocimiento asuman las obligaciones derivadas de la paternidad, con lo que, además, al permitir la asunción de las obligaciones derivadas de la paternidad se promueve que se cumplan las obligaciones y prestaciones que el menor requiere para su adecuado desarrollo.

160. Por lo que al atender a la importancia del análisis que se haga del contrato de gestación y en virtud de que se busca brindar la mayor seguridad jurídica posible con relación al derecho de filiación, se estima que la jurisdicción voluntaria es el procedimiento legalmente apto para solicitar el reconocimiento de maternidad o paternidad con base en estos contratos de maternidad sustituta, al ser un proceso en el que el órgano jurisdiccional, en una primera aproximación, solo interviene para darle eficacia a la formación o creación de nuevas situaciones de derecho, lo que se estima razonable y coherente con el fin buscado, que es el derecho a la identidad de los menores.
161. **Una razón más** para considerar que el juez que conozca de las diligencias de jurisdicción voluntaria en la resolución correspondiente debe ordenar la expedición del acta de nacimiento al Director del Registro Civil es lo relativo a que el silencio de la ley no admite dar lugar a que se deje de resolver lo pretendido hasta sus últimas consecuencias.
162. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó que es deber del juez establecer la filiación de un menor de edad nacido bajo la técnica de maternidad subrogada, aun ante la ausencia de regulación específica. Así, por identidad de razón, no cabría desconocer dicho criterio para los casos de gestación o maternidad sustituta, tal como se advierte de la tesis aislada 1a. LXXXVIII/2019 **“FILIACIÓN DE UN MENOR DE EDAD NACIDO BAJO LA TÉCNICA DE MATERNIDAD SUBROGADA. ES DEBER DEL JUEZ ESTABLECERLA, AUN ANTE LA AUSENCIA DE REGULACIÓN ESPECÍFICA⁶⁰”**.

⁶⁰ Texto: “La ausencia de regulación expresa o específica sobre cómo establecer la filiación de los hijos nacidos mediante el uso de técnicas de reproducción asistida, y particularmente de la llamada maternidad subrogada o útero subrogado, no debe erigirse en impedimento para que el Juez se pronuncie al respecto, no sólo porque el silencio de la ley no lo autoriza a dejar de resolver alguna controversia, sino porque en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el goce y el ejercicio de los derechos humanos de las personas no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución establece y asimismo, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, entre los cuales se encuentra el derecho a la identidad de los menores de

163. Dicho criterio es orientador en cuanto a que la falta de legislación en cuestiones de maternidad subrogada no debe dar lugar a dejar de resolver “las controversias” que se sometan ante todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, en perjuicio de los menores de edad.
164. La ausencia de regulación expresa o específica sobre cómo establecer la filiación de los hijos nacidos mediante el uso de técnicas de reproducción asistida y, particularmente, de la llamada gestación o maternidad sustituta, no debe limitarse a ese aspecto sustancial, sino también debe hacerse extensiva a los medios que, en su caso, puedan adoptarse para hacer efectivo el registro de los menores, pues el Estado debe garantizar ese derecho fundamental.
165. El registro de nacimiento constituye un proceso de inscribir el nacimiento de una persona, que ordinariamente es un menor de edad. Es un registro permanente y oficial de la existencia de un niño y garantiza el reconocimiento jurídico de su identidad. Por esta razón, el registro de nacimiento no solo es la forma en que se protege un derecho fundamental, sino que es facilitador también del goce o respeto de otros derechos de los niños, como son el reconocimiento a su capacidad de goce, nombre, nacionalidad, suministro de alimentos, atención médica, derecho a heredar, entre otros más.

edad y la necesidad de atender a su interés superior. **En ese sentido, ante la realidad fáctica de un niño o una niña nacido bajo esta técnica, su derecho a la identidad y la protección a su interés superior exigen determinar la filiación que les corresponde, ya que tienen derecho a contar con todos los derechos derivados de la filiación, como los alimentarios y sucesorios, así como a recibir cuidados, educación, afecto y todo lo necesario para su adecuado desarrollo.** Al respecto, debe determinarse si entre las reglas aplicables en materia de filiación y registro de nacimiento hay algunas que permitan atribuir la filiación, como lo serían la presunción de paternidad o **el reconocimiento de hijos**. Asimismo, debe tenerse presente que la demostración de un vínculo biológico no es un requisito indispensable para establecer la filiación sobre un hijo, como sucede en la aplicación de las técnicas de reproducción asistida, en las que opera al respecto la voluntad para concebirlo o voluntad procreacional y en el caso de la maternidad subrogada, es necesaria también la concurrencia de la voluntad libre de vicios de la madre gestante, y sobre la base de que dicha mujer debe ser mayor de edad y con plena capacidad de ejercicio”, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, libro 71, octubre de 2019, t. II, p. 1159.

166. De modo que, de conformidad con el artículo 940 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, es de interés público que la identidad jurídica de los menores de edad y todos los derechos inherentes a dicha identidad se protejan mediante la inscripción de su nacimiento, sin que la existencia de algún vacío legal, como sucede en la filiación de los hijos nacidos mediante el uso de técnicas de reproducción asistida, sea suficiente, menos aún justifique, dejar de llevar a cabo ese registro.
167. Ese vacío legal no puede servir de fundamento para justificar que no es posible ordenar al Registro Civil llevar a cabo la expedición del acta de nacimiento, en el supuesto de que proceda la vinculación de la filiación derivado de un contrato de gestación sustituta y su reconocimiento, so pretexto de que las diligencias de jurisdicción voluntaria no constituyen derechos sustantivos sobre filiación en estos supuestos (aunque sí la establece en adopciones y reconocimientos voluntarios de paternidad), ni menos aún puede servir de base para dejar de resolver “una controversia”, tal como lo dispone el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 18 del Código Civil para la Ciudad de México. Máxime que, en términos del artículo 1º de la Carta Magna, el goce y el ejercicio de los derechos humanos de las personas no puede restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que dicho ordenamiento lo establece.
168. Así la falta de legislación específica no puede erigirse en impedimento para que el juez se pronuncie al respecto sobre la filiación y sobre los medios para hacer efectivo el derecho a la identidad de las personas menores de edad, pues el silencio de la ley no lo autoriza a dejar de resolver alguna “controversia” y, sí, por el contrario, deben realizarse las gestiones necesarias para garantizar el derecho a la identidad, en términos de lo que disponen los artículos 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8º de la Convención sobre los Derechos del Niño.

169. En efecto, el órgano jurisdiccional debe tomar las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, pues según lo dispuesto en el “Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en casos que involucren Niños, Niñas y Adolescentes”, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los aspectos formales no pueden ser impedimento para que los juzgadores dicten las medidas urgentes necesarias con el objeto de salvaguardar la integridad y el interés superior del menor, pues, de lo contrario se le estaría poniendo en riesgo, por una cuestión meramente formal, lo cual contraviene el contenido de los artículos 25 y 28 de la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos de los Niños, suscritos por el Estado Mexicano.
170. En estas condiciones, este tribunal colegiado de circuito concluye que asiste razón a los quejosos en el sentido de que las diligencias de jurisdicción voluntaria son un medio procedimental apto para obtener el acta de nacimiento del hijo nacido bajo la técnica de gestación sustituta, cuando no hay disputa entre las partes, lo cual significa que con la admisión de la solicitud de las diligencias de jurisdicción voluntaria se privilegiará el interés superior del menor en tanto que se buscará una alternativa legal para realizar el registro de nacimiento con base en la voluntad procreacional a través del reconocimiento voluntario.
171. Durante el procedimiento de jurisdicción voluntaria podrá darse vista al Ministerio Público correspondiente y al Director del Registro Civil para hacer del conocimiento la situación que se presenta. En el entendido de que la eventual objeción no puede fundarse en el hecho de que la ley o el reglamento no permite el registro de menores procreados con base en las técnicas de reproducción asistida, sino sobre la existencia misma de la procreación que repercutirá en el registro de la persona menor de edad; aspectos que el juez de lo familiar valorará con base en las

amplias facultades que en materia de derecho de menores prevé el artículo 941 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México.

172. El registro quedará vinculado a que se cumplan los requisitos esenciales de ley, previstos en el artículo 54 del Código Civil para la Ciudad de México y relativos del Reglamento del Registro Civil, esto es, mediante la presentación del niño o niña ante el Registro Civil, en su oficina, la exhibición del certificado de nacimiento o alumbramiento, la sentencia que ordene la expedición del acta de nacimiento y los datos de identificación del progenitor que la presenta y del varón que pretende reconocerlo.
173. En su caso, deberá considerarse que, de al ser un hecho notorio que han transcurrido más de seis meses desde el nacimiento de la persona menor de edad, el registro extemporáneo no será atribuible a quienes la presentan, debido a la secuela procesal y constitucional que fue detallada a lo largo de esta decisión.
174. Consecuentemente, ante lo fundado de los agravios y de los conceptos de violación expuestos, procede revocar la resolución que negó el amparo solicitado y, en su lugar, conceder la protección constitucional para el efecto de que la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México deje insubsistente la resolución reclamada, en su lugar dicte otra en la que, con sujeción a lo expuesto en esta ejecutoria, parta de la base de que las diligencias de jurisdicción voluntaria son un medio procedimental apto para obtener un acta de nacimiento de un niño nacido bajo la técnica de gestación sustituta, cuando no hay disputa entre las partes y, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda de conformidad con el material probatorio presentado por las personas interesadas.
175. La concesión de amparo deberá hacerse extensiva al acto de ejecución que se reclama al Juez Quinto de Proceso Oral en

Materia Familiar de la Ciudad de México, por no atribuirle vicios propios, con base en la jurisprudencia de la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:

AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de esta⁶¹.

176. **SEXTO. Denuncia de posible contradicción de criterios.**

177. De conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos⁶²; 226, fracción III, de la Ley de Amparo⁶³ y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación⁶⁴, así como en lo dispuesto por la jurisprudencia 2a. LXXI/2019 “**CONTRADICCIÓN DE TESIS. LOS MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA DENUNCIARLA, INCLUSO CUANDO PERTENEZCAN A ÓRGANOS DISTINTOS DE LOS CONTENDIENTES**”⁶⁵”, se formula la denuncia de la posible contradicción de criterios entre la postura asumida por este tribunal al resolver el presente recurso de revisión 3/2023; la diversa sustentada por el Tercer Tribunal

⁶¹ Tesis 102, Apéndice de 1995, Quinta Época, t. VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, p. 66

⁶² **Artículo 107.** Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
(...)

Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito de la misma región sustenten criterios contradictorios en los juicios de amparo de su competencia, el o la Fiscal General de la República, en asuntos en materia penal y procesal penal, así como los relacionados con el ámbito de sus funciones, los mencionados tribunales y sus integrantes, las y los Jueces de Distrito, las partes en los asuntos que los motivaron o el Ejecutivo Federal, por conducto de la o el Consejero Jurídico del Gobierno podrán denunciar la contradicción ante el Pleno Regional correspondiente, a fin de que decida el criterio que debe prevalecer como precedente.

⁶³ **Artículo 226.** Las contradicciones de criterios serán resueltas por: (...) **III.** Los plenos regionales cuando deban dilucidarse criterios contradictorios entre los tribunales colegiados de circuito de la región correspondiente.

⁶⁴ **Artículo 42.** Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los plenos regionales para: **I.** Resolver las contradicciones de criterios sostenidas entre los tribunales colegiados de circuito de la región correspondiente, determinando cuál de ellas debe prevalecer; (...).

⁶⁵ 2a. LXXI/2019, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 71, Octubre de 2019, t. II, p. 2022.

Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 191/2023; y la ejecutoria del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 214/2022, que dio origen a la tesis aislada de rubro: **“DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. NO CONSTITUYEN LA VÍA PARA QUE UN JUEZ FAMILIAR ORDENE AL REGISTRO CIVIL EXPEDIR UN ACTA DE NACIMIENTO A SOLICITUD DE LOS INTERESADOS, CON BASE EN UN CONTRATO DE MATERNIDAD SUSTITUTA (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO)”⁶⁶**. Con la salvedad de que existan otros tribunales colegiados de esta región que hayan sustentado criterios que pudieran encontrarse en contradicción con lo que se expone en lo subsecuente.

178. Se hace la denuncia respectiva, por los siguientes motivos: El **Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito** analizó si la jurisdicción voluntaria es la vía idónea para lograr el propósito de los quejosos consistente en la inscripción de una persona menor de edad en el Registro Civil, nacida mediante la técnica de reproducción asistida de maternidad sustituta.
179. Ese examen concluyó en una respuesta negativa, bajo el argumento total de que si bien en conformidad con el artículo 893 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, el procedimiento de jurisdicción voluntaria no solo es apto para realizar actos de mera constatación de hechos, sino que también se ejerce en tratándose de actos que requieran de una formación especial como sucede cuando la eficacia jurídica de la voluntad privada se subordina a una confirmación de parte del Estado sobre la legalidad del acto sin contención, lo cierto era que los quejosos pretendían que el juez constatará el cumplimiento del contrato, en varias de sus etapas, sin posibilidad de corregirlo, pues ello sería tanto como crear una controversia en un proceso

⁶⁶ I.6o.C.9 C, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 28, Agosto de 2023, t. V, p. 4383. Registro digital: 2027022.

que no lo permite, aunado a que la intención de los justiciables podía acogerse ante un Notario Público o ante cualquier fedatario.

180. Por tanto, ese tribunal coligió, por mayoría de votos, que la jurisdicción voluntaria no era adecuada ni apta para el propósito buscado por los quejosos, atinente, en lo que interesa, a que el juez del conocimiento girara oficio al Registro Civil para el efecto de que fuera expedida el acta de nacimiento a nombre de los padres biológicos, derivado de un contrato de maternidad sustituta.

181. Por su parte, el **Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito** consideró que las diligencias de jurisdicción voluntaria no constituyen la vía para que un juez familiar ordene al Registro Civil expedir un acta de nacimiento a solicitud de los interesados, con base en un contrato de maternidad sustituta, dado que dicha petición no se ajusta al contenido del artículo 893 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, en tanto que se estaría constituyendo una situación jurídica familiar que no es propia de esa vía, ya que el juez adoptaría una posición o postura frente a la pretensión concreta de los solicitantes, lo que no es acorde con su objeto, el cual se limita a dar certeza jurídica de un acto, a solicitud de parte, pero sin constituir un derecho, como lo es el reconocimiento del estado civil ante la orden de expedir un acta de nacimiento.

182. Concomitantemente, determinó que no existe sustento para considerar que la resolución que emita el juez en esa vía constituya una sentencia ejecutoriada que defina el estado civil de una persona, específicamente el nacimiento, solo ante la solicitud de parte interesada; sobre todo, porque los artículos 54 y 55 del Código Civil para el Distrito Federal y 46 del Reglamento del Registro Civil del Distrito Federal, ambos aplicables para la Ciudad de México, establecen el procedimiento a seguir para la

expedición de un acta de nacimiento, directamente ante dicha institución, quien debe emitir las declaraciones de nacimiento cuando se presente a la niña o al niño ante el Registro Civil en su oficina o en el lugar donde aquel hubiera nacido, con el acompañamiento del certificado de nacimiento; y quienes tienen la obligación de declarar el nacimiento para la autorización de las actas relativas, entre otras personas, son el padre y la madre o cualquiera de ellos.

183. En cambio, este **Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito**, de modo contrario a los dos tribunales mencionados, en esta sentencia se estableció que, si se parte de la base de que lo que se pretende es el reconocimiento de paternidad mediante la instauración del procedimiento de jurisdicción voluntaria, que es, ordinariamente, el medio para hacerlo en los procesos de adopción, incluidos los relacionados con gestación subrogada, entonces es evidente que la pretensión de las partes es viable, porque ese reconocimiento no se puede lograr a través del acceso directo al Registro Civil, ya que el certificado de nacimiento, de acuerdo con la Ley General de Salud y con el manual para su llenado que expide la Secretaría de Salud, los datos de la persona recién nacida llevan el nombre de la persona que la gesta, es decir la que da a luz, sin que exista la menor posibilidad de que en esa instancia se investigue sobre quiénes son los ascendientes biológicos y/o con voluntad procreacional.

184. Por tanto, el que se prive de realizar ese reconocimiento mediante la instauración del procedimiento de jurisdicción voluntaria, donde se hace patente la voluntad de los futuros padres de establecer lazos de filiación (consanguínea o de reconocimiento), sin contención, limita la constitución de la filiación jurídica y a privilegiar la estabilidad familiar y el acceso inmediato de la persona menor de edad a las prerrogativas de la filiación jurídica frente a quienes asumen para con él deberes parentales; por

tanto, se excluye de su protección a las personas menores de edad que nacen en contextos de uniones familiares homoparentales y ello la torna inconstitucional por resultar contraria al interés superior de niñas, niños y adolescentes al constituir una franca discriminación hacia los ascendientes.

185. Finalmente, se dijo que derivado de ese ejercicio, es posible solicitar al Registro Civil extienda un acta de nacimiento, previa la constatación de esos hechos, como consecuencia de haber prosperado el reconocimiento de paternidad intencional, pues no se habla de una condena en sí misma, sino de un acto tendente a garantizar el registro del nacimiento de un menor, lo más inmediatamente posible, en concordancia con lo que dispone el artículo 4º de la Constitución Federal que establece el derecho a la identidad de toda persona y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento, sobre todo si esa solicitud proviene de un procedimiento en el que todas las partes que participan en el contrato de gestación sustituta tienen interés en su validación, pues su objeto es la intervención del juzgado para dotar de mayor fuerza al acto jurídico y culminarlo, incluso, con su registro.
186. En esa tesitura, ante la posible contradicción de criterios respecto de problemas similares, este Tribunal considera procedente plantear la correspondiente denuncia de contradicción de tesis, a efecto de que el Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, fije el criterio que debe prevalecer.
187. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 184 y 188 de la Ley de Amparo, así como del numeral 27 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO. Se **revoca** la sentencia recurrida.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión **ampara y protege** a

***** , a ***** y a *****

***** , contra los actos que reclamaron de la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y su ejecución, atribuida al Juez Quinto de Proceso Oral en Materia Familiar de la Ciudad de México, que quedaron precisados en el resultando primero de esta resolución. Los efectos del amparo se precisan en la parte final de esta ejecutoria.

TERCERO. Por conducto del magistrado presidente de este tribunal colegiado, **DENÚNCIESE LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS** a que se hizo referencia en el último considerando de esta ejecutoria, ante el Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, devuélvanse los autos al juzgado de distrito que los remitió y, en su oportunidad, archívese el presente toca como asunto concluido.

Así lo resolvió el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por unanimidad de votos de la magistrada **Gabriela Eleonora Cortés Araujo** y los magistrados **Carlos Arellano Hobelsberger** y **Alejandro Sánchez López**, presidente. Firman electrónicamente la sentencia todos los nombrados, ante el secretario de acuerdos, quien autoriza y da fe.

MAGISTRADA PONENTE

GABRIELA ELEONORA CORTÉS ARAUJO.

MAGISTRADO

CARLOS ARELLANO HOBELSBERGER.

MAGISTRADO PRESIDENTE

ALEJANDRO SÁNCHEZ LÓPEZ.

SECRETARIO DE ACUERDOS

LIC. LUIS DANIEL SÁNCHEZ CISNEROS.

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA PARTE FINAL DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EL TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, EN EL AMPARO EN REVISIÓN R.C. 3/2023, INTERPUESTO POR ***** Y ***** EN EL FALLO SE RESOLVIÓ: **REVOCAR LA SENTENCIA RECURRIDA, CONCEDER EL AMPARO PARA EFECTOS A LOS QUEJOSOS Y DENUNCIAR LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS.** CONSTE.

GECA/EER/VÍCTOR/ABBB.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:
66499603_04980000319001200006007003.p7m
Autoridad Certificadora:
Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Firmante(s): 4

| FIRMANTE | | | | |
|--|--|-------------|------|-------------|
| Nombre: | Alejandro Sánchez López | Validez: | BIEN | Vigente |
| FIRMA | | | | |
| No. serie: | 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.39.08 | Revocación: | Bien | No revocado |
| Fecha: (UTC/ CDMX) | 10/11/23 18:06:45 - 10/11/23 12:06:45 | Status: | Bien | Valida |
| Algoritmo: | RSA - SHA256 | | | |
| Cadena de firma: | 83 4f be 14 e4 8f 03 37 9e 73 8a 32 34 22 f5 ba b3 f3 b8 23 92 eb bc 24 d6 e0 db 9c 0d 10 77 2d c1 98 04 58 cc f0 0b 12 af 72 12 31 43 8f 8a 9a 8c f7 b7 27 1b b6 50 bf 4c 12 5a 2d dc f8 26 c6 49 4a 69 d6 64 a1 6a e6 1b 66 68 83 07 fa eb 67 23 0b f6 af eb 20 e0 eb cc ce a0 2c 98 39 c2 67 7a 30 c7 2a c5 c3 ca b1 fa 1e 4d 3b 49 3c 3d a0 ee a8 f1 9a a0 58 87 28 5e a4 73 66 2a c8 a2 51 99 2f ed fc 63 8e 26 93 c5 a2 2e 4e 75 eb c1 e7 f5 19 70 84 fc 03 fb 27 41 dc 15 0a cb 39 ad 7a 73 fc d2 be f4 18 6b 9a 5a f5 b8 2e 71 ca d1 f0 2a b0 f5 09 d4 01 35 45 45 3c d8 37 44 f9 4f e8 80 7d 0e 5a 3e af a3 da 79 57 14 71 c1 2c b7 1c 72 10 4b ff a8 d5 18 e4 06 4d 52 30 ca 74 12 87 5f f7 f3 fc c5 b4 a4 c0 b1 78 91 3d bd 7c 25 0e 28 94 b0 13 50 7c 57 62 e8 4f 8b 08 54 5b d9 e4 | | | |
| OCSP | | | | |
| Fecha: (UTC / CDMX) | 10/11/23 18:06:45 - 10/11/23 12:06:45 | | | |
| Nombre del respondedor: | Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal | | | |
| Emisor del respondedor: | Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal | | | |
| Número de serie: | 70.6a.66.32.20.63.6a.66.6f.63.73.70 | | | |
| TSP | | | | |
| Fecha : (UTC / CDMX) | 10/11/23 18:06:45 - 10/11/23 12:06:45 | | | |
| Nombre del emisor de la respuesta TSP: | Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal | | | |
| Emisor del certificado TSP: | Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal | | | |
| Identificador de la respuesta TSP: | 61464739 | | | |
| Datos estampillados: | FGBUrFtuu+uspVcB9Dn4PmW7EY= | | | |



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

| FIRMANTE | | | | |
|--|--|-------------|------|-------------|
| Nombre: | Carlos Arellano Hobelsberger | Validez: | BIEN | Vigente |
| FIRMA | | | | |
| No. serie: | 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.18.fc | Revocación: | Bien | No revocado |
| Fecha: (UTC/ CDMX) | 10/11/23 18:07:03 - 10/11/23 12:07:03 | Status: | Bien | Valida |
| Algoritmo: | RSA - SHA256 | | | |
| Cadena de firma: | 12 31 c8 73 7a 39 b9 82 7b 55 40 3d ea e9 f0 d3 7f 83 14 d0 9a d9 f2 bd 5b d2 26 ab 00 9a 0c 49 fb ca cc 2f 68 48 29 cd 07 1e 08 48 f8 1d b7 88 cc fb 41 32 f4 b1 3d 84 d4 8a 7e 5a e0 e0 73 0a a1 ac c8 f6 a3 bf e9 bb dd 75 4f 6c 31 b1 ed 4f 6e a7 e3 de fd 83 7c 92 5c 69 6a d2 db 8c 18 38 d7 e0 f9 60 ed 0d 55 0f 17 c3 9c a8 cf f8 d5 cf 9c ce 91 70 65 11 fe 6d 7a 6d ad 9b 8b 54 d1 f8 76 0d 06 1c a7 dc 98 e7 80 b2 ca f1 94 01 bc e7 a7 ff 6f c4 a6 f2 89 28 0d 09 fa 4a 99 ba 89 e8 f3 52 49 7d 3d da fc 2e a8 59 e5 69 17 29 b4 9d d6 0f db 83 0a 3c 06 42 aa c0 bf fe b0 bf 4e e3 41 51 77 50 cb 4b 95 07 9a 10 80 a3 37 88 33 ad d4 00 ac 62 18 44 73 4a 1c dd ff e6 8c 3c 6e 7f 32 5e c1 f9 de ea a4 5c 1d 0b 77 2a 4f 02 ba db fc 66 7a 07 6a a6 4b 90 6b 79 f0 a8 dd 0b 50 28 | | | |
| OCSP | | | | |
| Fecha: (UTC / CDMX) | 10/11/23 18:07:02 - 10/11/23 12:07:02 | | | |
| Nombre del respondedor: | OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal | | | |
| Emisor del respondedor: | Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal | | | |
| Número de serie: | 70.6a.66.20.63.6a.66.03 | | | |
| TSP | | | | |
| Fecha : (UTC / CDMX) | 10/11/23 18:07:03 - 10/11/23 12:07:03 | | | |
| Nombre del emisor de la respuesta TSP: | Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal | | | |
| Emisor del certificado TSP: | Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal | | | |
| Identificador de la respuesta TSP: | 61465112 | | | |
| Datos estampillados: | N3Y7A1QYyA91McMyN/jTnWAJ9dE= | | | |



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

| FIRMANTE | | | | |
|--|--|-------------|------|-------------|
| Nombre: | GABRIELA ELEONORA CORTES ARAUJO | Validez: | BIEN | Vigente |
| FIRMA | | | | |
| No. serie: | 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.0a.bd | Revocación: | Bien | No revocado |
| Fecha: (UTC/ CDMX) | 10/11/23 18:07:23 - 10/11/23 12:07:23 | Status: | Bien | Valida |
| Algoritmo: | RSA - SHA256 | | | |
| Cadena de firma: | 6c b2 33 89 0a 20 da 54 a8 97 5e 97 92 f7 5d 6c ba f1 c6 2d 7a ec 62 f7 9d a1 d1 9b 80 39 41 b5 3c e4 73 1d 5f 10 5e df e2 57 df 39 6a 2f 0b 36 43 30 d2 34 c3 4f 00 e1 dd 5f 5c e3 14 a9 48 4f c9 1e 7a 32 d7 ec fe bd 6e 05 fe 50 2a 0e da f8 e1 92 2b 53 e3 e9 ba dd f4 a8 b4 2e 94 f8 a2 c9 ef 2a 54 86 87 1f 05 8d a4 54 0a 59 42 cb d3 55 e3 d0 54 91 f2 d0 2b 36 d6 4e 19 f2 0d 50 4c 9e 49 19 bd 65 79 13 d5 3b c0 a7 1f 2c 58 9a 5d 15 36 48 2d 72 b4 3b 94 ee b0 a7 19 cd 1c be ef 01 e7 4f e9 30 a3 28 35 53 6d 04 08 d6 80 fc 80 8a dc ae a8 00 22 56 47 a6 b9 74 2d 51 ae b4 c7 4d be 6a cd 3a b4 eb ec 1b 33 a5 d4 2d 0a 7f 69 3a 25 4f 23 4a c2 ed a7 f6 42 94 ab 85 3b 4b 08 9e eb 8f ac d4 5c f1 4f ac 7a 66 15 2f 77 2b 7c a5 da 8c fc 0e 3c 4b af 4a b0 a0 d4 22 0f b1 a1 2b | | | |
| OCSP | | | | |
| Fecha: (UTC / CDMX) | 10/11/23 18:07:23 - 10/11/23 12:07:23 | | | |
| Nombre del respondedor: | Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal | | | |
| Emisor del respondedor: | Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal | | | |
| Número de serie: | 70.6a.66.32.20.63.6a.66.6f.63.73.70 | | | |
| TSP | | | | |
| Fecha : (UTC / CDMX) | 10/11/23 18:07:23 - 10/11/23 12:07:23 | | | |
| Nombre del emisor de la respuesta TSP: | Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal | | | |
| Emisor del certificado TSP: | Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal | | | |
| Identificador de la respuesta TSP: | 61465556 | | | |
| Datos estampillados: | YapwR/FXmawlpEp3YpaLEBlyOeE= | | | |



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

| FIRMANTE | | | | |
|--|--|-------------|------|-------------|
| Nombre: | LUIS DANIEL SANCHEZ CISNEROS | Validez: | BIEN | Vigente |
| FIRMA | | | | |
| No. serie: | 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.02.fd.c4 | Revocación: | Bien | No revocado |
| Fecha: (UTC/ CDMX) | 10/11/23 18:08:01 - 10/11/23 12:08:01 | Status: | Bien | Valida |
| Algoritmo: | RSA - SHA256 | | | |
| Cadena de firma: | ae 0a ce 47 ac 83 73 47 48 4d 1b 8a 22 47 43 8d 7d c1 bb c1 24 a8 19 b7 65 2a 2e 13 02 39 0e 1c d6 9a 2c 02 56 2d 44 b8 ac 9c 3f ab 3e b1 97 d7 db 09 16 aa 87 80 8b f1 2a f9 37 6c 38 24 13 6e 01 d7 8c 9c 25 72 9c 85 83 1d 22 42 8c bf 58 f7 e0 3a 2e 03 bf c5 83 85 1e e8 de 0c ee ce 9e ac 1c 32 ca 31 2f 47 22 e5 28 ce c6 a4 94 df 0d 4c 3c fa 67 f8 c8 c9 cf 65 48 e8 c9 88 c3 f3 cd be 18 7a 1b 27 15 be 48 2b 52 49 93 3d 1c c2 37 8f 13 d3 1c 64 8b d5 49 44 f0 51 50 d8 38 01 fc ea bb 98 a4 41 fc 5c 66 a5 1f 5a 5b f9 e1 04 84 c8 4c 14 a4 b1 8f 34 38 80 27 33 da c9 a1 6e 06 8b 30 91 37 5f ef aa ce a5 b5 c3 5c 49 cd 25 16 13 7e c9 c5 76 3b a5 03 34 d0 a3 0f bc 3f a1 36 17 20 9e f4 09 68 9d 6f 96 98 8b eb 28 06 12 dc 70 a8 49 84 61 b2 17 65 40 eb 47 6a b8 4c 40 48 57 | | | |
| OCSP | | | | |
| Fecha: (UTC / CDMX) | 10/11/23 18:08:00 - 10/11/23 12:08:00 | | | |
| Nombre del respondedor: | OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal | | | |
| Emisor del respondedor: | Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal | | | |
| Número de serie: | 70.6a.66.20.63.6a.66.03 | | | |
| TSP | | | | |
| Fecha : (UTC / CDMX) | 10/11/23 18:08:01 - 10/11/23 12:08:01 | | | |
| Nombre del emisor de la respuesta TSP: | Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal | | | |
| Emisor del certificado TSP: | Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal | | | |
| Identificador de la respuesta TSP: | 61466437 | | | |
| Datos estampillados: | +U8ix6dtzSYkkN3sFCkKFAFB28k= | | | |

El diez de noviembre de dos mil veintitres, el licenciado Edgar Escobar Rios, Secretario(a), con adscripción en el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, hago constar y certifico que en esta versión pública no existe información clasificada como confidencial o reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Conste.